

## ADDENDA

### SOBRE LA VULNERABILIDAD DEL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN

La Sentencia que pasamos a reproducir trae causa de una Resolución municipal de 1 de febrero de 2016 confirmada posteriormente en alzada, por la que se dejaba sin efecto la comunicación presentada el 21 de junio de 2012 por una mercantil con el propósito de ejercer en un local determinado la actividad de comercio alimentario.

El motivo aducido por el Ayuntamiento: que con la comunicación no se había adjuntado un informe urbanístico municipal, de solicitud previa y preceptiva.

Podríamos decir que la Sala de Cataluña vino a considerar que comunicación más transcurso del tiempo sin que el Ayuntamiento formulara objeciones equivalía a título válido de no mediar revisión de oficio.

El Tribunal Supremo no fue de la misma opinión.

A renglón seguido de la STS se inserta parcialmente la Ordenanza aplicada por el Ayuntamiento.

---


EDJ 2023/527812 STS (CONTENCIOSO) DE 8 MARZO DE 2023

Iter del caso

**Tribunal Supremo (Contencioso), sec. 5ª, S 08-03-2023, nº 293/2023, rec. 8658/2021**  
PTE.: Olea Godoy, Wenceslao  
ROJ: STS 884:2023  
ECLI: ES:TS:2023:884

Procedimiento: **Recurso de casación**  
Sentido del fallo: **Estimación**

**Demandante/recurrente: Administración autora del acto**

-  Iter del caso

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

### **PRIMERO.-**

Objeto del proceso en la instancia.-

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de **Cataluña** dictó sentencia de 14 de septiembre de 2020 por la que, con estimación del recurso de apelación nº 163/19 interpuesto por las entidades "SANA DEGUSTACIÓN, S.L." y "AGUILEAN, S.L." y revocación de la sentencia de 26 de marzo de 2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona, estima el P.O 217/17 entablado contra la resolución de 21 de marzo de 2017 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona confirmatoria enalzada de la resolución de 1 de febrero de 2016 del Gerente del Distrito de IZÈixample que deja sin efecto la **comunicación** presentada por "AGUILEAN, S.L." para el ejercicio de la actividad de despacho de pan con degustación en local sito en la Ronda de Sant Antoni.

La Sala, y por cuanto al presente auto interesa, considera que el marco normativo establecido con carácter general para la **comunicación previa** permite el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación y faculta a la administración pública correspondiente para verificar la conformidad de los datos que en ella se contienen; pero esa verificación o comprobación no puede efectuarse por parte de la administración sin límite de tiempo porque supondría "una conformación temporal más comprometida, frágil y contraria al principio de seguridad jurídica para su titular y terceros que ... [las] licencias o autorizaciones expresas", por lo que concluye que, en defecto de plazo establecido y por analogía, el ejercicio de aquellas facultades de verificación o comprobación no puede ser reconocido más allá del plazo supletorio de **tres meses** del artículo 42.2 de la Ley **30/1992**, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (EDL 1992/17271), -aplicable *ratione temporis* -, debiéndose acudir, pasado ese lapso de tiempo, al procedimiento de revisión de oficio.

### **SEGUNDO.**

El recurso de casación promovido por la parte.-

Frente a dicha sentencia la representación procesal del Ayuntamiento de Barcelona, prepara recurso de casación, en el que razona sobre la presentación del recurso en plazo, su legitimación y la recurribilidad de la resolución impugnada.

Identifica como infringido, en lo que al presente auto interesa, los artículos **71 bis** y 42.1 de la Ley **30/1992**, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actuales artículo 69 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), considerando que la sentencia recurrida infringe el régimen de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad previsto en el primer precepto citado, por cuanto asimila el régimen de **comunicación** al de las licencias o autorizaciones, actos administrativos sometidos a verificación administrativa previa al ejercicio de una actividad, cuando respecto de las **comunicaciones** previas, la norma exceptúa expresamente la obligación de dictar resolución expresa y olvidando que la **comunicación** no es un acto administrativo susceptible de revisión de oficio, sino un acto del interesado que produce efectos jurídicos.

Invoca, como supuestos de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, los previstos en los arts. 88.2 b), c) y 88.3.a) LJCA.

### TERCERO.

Admisión del recurso.-

Mediante auto de 19 de octubre de 2021, la Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de treinta días, con remisión de los autos originales y del expediente administrativo.

Recibidas las actuaciones y personadas las partes ante este Tribunal, por la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se dictó auto el 20 de julio de 2022, acordando:

<< 1º) Admitir el recurso de casación nº 8658/2021 preparado por la representación procesal del Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia de 14 de septiembre de 2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de Justicia de **Cataluña** (Sección Tercera) estimatoria de recurso de apelación nº 163/19.

2º) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las Administraciones Públicas para verificar las declaraciones responsables y las **comunicaciones** que permiten el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, se encuentra sometido a plazo, y en su caso, determinar el mismo, o sí por el contrario, su ejercicio no se encuentra sometido a límite temporal alguno y puede ser ejercitado mientras se ejerza el derecho o se lleve a cabo la actividad comunicada.

3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, el artículo **71 bis** de la Ley **30/1992**, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actual artículo 69 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690)), en relación con el artículo 42.1, 2 y 3 de la Ley **30/1992**, (actual artículo 21.1, 2 y 3 de la Ley 39/2015), con el artículo 39.bis de la Ley **30/1992** (actual (EDL 1992/17271) artículo 4 de la Ley 40/2015 (EDL 2015/167833)), y con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (EDL 2009/251214), sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006 (EDL 2006/318974), relativa a los servicios en el mercado interior, las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, ello sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado ( art. 90.4 LJCA (EDL 1998/44323)).

4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

6º) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Quinta de esta Sala Tercera, a la que corresponde el enjuiciamiento del recurso con arreglo a las vigentes normas sobre reparto de asuntos.  
>>

### CUARTO.

Interposición del recurso.-

Abierto el trámite de interposición del recurso, se presentó escrito por la representación procesal del Ayuntamiento de Barcelona con exposición razonada de las infracciones normativas y/o jurisprudenciales identificadas en el escrito de preparación, precisando el sentido de las pretensiones que deduce y los pronunciamientos que solicita y termina suplicando a la Sala: "<Que teniendo per presentado el presente escrito, lo admita, tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de casación contra la sentencia núm. 3609 de 14 de septiembre de 2020, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de **Cataluña** y, en méritos de lo expuesto en el presente escrito: 1) En primer lugar, se fije doctrina jurisprudencial en el sentido que el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las Administraciones públicas en virtud del apartado 3 del art. **71 bis** de la Ley **30/1992** (EDL 1992/17271) (y actualmente el art. 69.3 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690)) para verificar las declaraciones responsables y las **comunicaciones** que permiten el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, no se encuentra sometido a límite temporal alguno y puede ser ejercitado mientras se ejerza el derecho o se lleve a cabo la actividad comunicada. 2) Y que, en consecuencia, estime el presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida, desestimando íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Sana Degustación SL" contra la resolución de la Alcaldía de 21 de marzo de 2017 que confirmó en alzada la resolución de 1 de febrero de 2016 del Gerente del Distrito del Eixample dejando sin efecto el comunicado presentado por "Agulean SL" para el ejercicio de la actividad de despacho de pan con degustación en el local bajos 2 de la finca de la Ronda de Sant Antoni 31 de Barcelona."

#### QUINTO.

Oposición al recurso.-

Dado traslado para oposición a la representación procesal de "Sana Degustación, S.L.", presentó escrito argumentando en contra del planteamiento del recurso, suplicando a la Sala: "Tenga por presentado este escrito, lo admita, y tenga por formulada OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN núm. RCA 8658/2021 interpuesto contra la Sentencia núm. la sentencia núm. 3609 de 14 de septiembre de 2020, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de **Cataluña** y, en méritos de lo expuesto en el presente escrito: a) Se fije doctrina jurisprudencial en el sentido que el ejercicio de las facultades de comprobación (potestad de veto), que tienen atribuidas las Administraciones públicas en virtud del apartado 3 del art. **71 bis** de la Ley **30/1992** (EDL 1992/17271) (y actualmente el art. 69.3 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690)) para verificar las declaraciones responsables y las **comunicaciones** que permiten el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, no puede ser eterna, por lo que, necesariamente, se encuentra sometido a plazo. "La verificación o comprobación de la conformidad de los datos que en ella se contienen en defecto de plazo establecido y hasta por analogía no puede ser reconocido más allá del plazo supletorio de **tres meses** del artículo 42.2 de la Ley **30/1992** (EDL 1992/17271) ." b) Y que, en consecuencia, se dicte sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona y confirme en todos sus extremos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de **Cataluña** , declarando la firmeza de la sentencia recurrida e imponiendo al recurrente las costas de este recurso, y cuanto demás que proceda en Derecho."

#### SEXTO.-

Ninguna de las partes solicitó la celebración de vista y la Sala no la consideró necesaria, señalándose para votación y fallo la audiencia del día 28 de febrero de 2023, en cuyo acto tuvo lugar su celebración, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento .

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

#### PRIMERO.

Objeto del recurso y fundamentos.

El presente recurso de casación se interpone por la representación procesal del Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia de apelación 3609/2020, de 14 de septiembre, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de **Cataluña**, (EDJ 2020/731337) en el rollo 163/2019. El recurso de apelación había sido promovido por las mercantiles "Sana Degustación, S.L." y "Aguilean, S.L.", en impugnación de la sentencia 77/2019, de 26 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Barcelona.

El inicial recurso contencioso-administrativo fue interpuesto contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de la mencionada Ciudad, de 21 de marzo de 2017, que, confirmando con la desestimación del recurso de alzada otra anterior de la Gerencia del Distrito de l'Eixample, dejaba sin efecto la **comunicación previa** que había sido presentada por la mercantiles para el ejercicio de la actividad de despacho de pan con degustación, en un local ubicado en la Ronda de Sant Antoni de Barcelona. La sentencia del Juzgado declaró la inadmisión del recurso por estimar que concurría la causa de inadmisibilidad del artículo 69-b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (EDL 1998/44323).

La sentencia del Tribunal territorial desestima la inadmisibilidad declarada en la instancia, estima el recurso de apelación, anula la sentencia del Juzgado y estima el recurso contencioso-administrativo anulando la resolución impugnada originariamente, sobre la declaración de dejar sin efecto la **comunicación previa** para el ejercicio de la mencionada actividad.

La motivación de la sentencia recurrida en casación para justificar la decisión adoptada se contiene, en lo que trasciende al presente recurso, en el fundamento tercero, en el que se declara:

"Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes contendientes en el presente recurso de apelación, a la luz de la prueba con que se cuenta -con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba del proceso seguido en primera instancia-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:

"1.- Efectivamente la **comunicación** de apertura de establecimientos o/y instalaciones se operó a 21 de junio de 2012 -expte. 02-2012-0707- por la entidad AGULEAN, S.L.

"Solo se siguen actuaciones para dejar sin efecto esa **comunicación** con el informe de 9 de noviembre de 2015 y seguidas actuaciones solo con la resolución de 1 de febrero de 2016 dirigida a AGULEAN, S. L. se deja sin efecto el comunicado con fundamento en el artículo 10 de la Ordenanza municipal de actividades y de intervención integral de la administración ambiental, el artículo 38 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto (EDL 2010/149455) y artículo **71 bis** de la Ley **30/1992**, de 26 de noviembre (EDL 1992/17271).

"Consta que se procedió a poner de manifiesto la transmisión de la licencia de actividades identificando su ubicación en el expediente 02-2012-0707 y que en el informe de 19 de enero de 2016, entendiéndose la administración que no se tenía licencia, no se admitió a trámite, si bien se presentaba determinada documentación -la licencia y la firma de la administradora de la sociedad cedente-, se procedería al archivo de la documentación -documento 1 de los acompañados a la demanda-. Todo ello seguido por la entidad SANA DEGUSTACIÓN, S.L.

"Los pronunciamientos administrativos impugnados son los contenidos en la resolución antes citada de 1 de febrero de 2016 y la de 21 de marzo de 2017 desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la anterior, ambos dirigidos a AGULEAN, S.L.

"La parte actora en primera instancia es SANA DEGUSTACION, S.L. Solo recaída la Sentencia apelada comparece la entidad AGULEAN, S.L. que igualmente interpone recurso de apelación contra la misma.

"2.- La Sentencia apelada en su sucinta argumentación parece que inadmite el recurso contencioso administrativo con fundamento en el artículo 69.b) de nuestra Ley Jurisdiccional -falta de legitimación- aunque

también se trasluce que no existe licencia. La controversia entre las partes queda centrada en todos esos hechos.

"3.- Este tribunal forma cumplida convicción que la entidad actora SANA DEGUSTACION, S.L. tiene suficiente y sobrada legitimación para seguir el proceso de primera instancia cuando, en abreviada síntesis, se ha puesto de manifiesto que desarrollando actividades en la ubicación de autos en línea con la titulación habilitante que se ha tratado de dejar sin efecto, de un lado, el mantenimiento de lo acordado por la Administración le perjudica ya que se deja sin efecto la titulación habilitante de **comunicación** "per l'exercici de l'activitat de despatx de pa amb degustació al local baixos 2 de la finca de la Ronda de Sant Antoni" y, de otro lado, la estimación de sus pretensiones de disconformidad a derecho de lo acordado por la Administración y el mantenimiento de la titulación habilitante para actividad referida efectivamente le beneficia.

"Y todo ello a salvo la deriva de la **comunicación** de la transmisión de la titulación habilitante a la que no se dio lugar con los efectos de responsabilidad que resulten procedentes -por todos, baste la cita del artículo 86.2 in fine del Decreto 179/1995, de 13 de junio (EDL 1995/17137), por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades locales, y demás disposiciones concordantes-.

"Ya en este punto procede estimar el presente recurso de apelación.

"4.- Pasando a depurar el fondo de haber dejado sin efecto a 2016-2017 una **comunicación** de 21 de junio de 2012 que pacíficamente estaba desplegando sus efectos habilitadores hasta esas actuaciones posteriores tan tardías, debe irse sentando lo siguiente:

"4.1.- Efectivamente el régimen a tener en cuenta no puede ser más que el resultante de la nueva configuración de los supuestos de **comunicación previa** y declaración responsable alejados de los contenidos en esas disposiciones reglamentarias autonómicas y municipal pretéritas y desfasadas y procede estar al nuevo régimen a resultas de lo establecido en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (EDL 2006/318974), relativa a los servicios en el mercado interior:

"Así, en sentido negativo, procede descartar los anteriores regímenes poco respetuosos con ese nuevo régimen como el artículo 97 del Decreto 179/1995, de 13 de junio (EDL 1995/17137), o el artículo 17 de la Ordenanza Municipal de actividades y de intervención integral de la administración ambiental de Barcelona, seguramente de 3 de marzo de 2001 u otras disposiciones que no se ajustan al nuevo régimen.

"Y, en sentido positivo, nada hay que objetar que la órbita idónea debe ser la que ofrecen preceptos posteriores:

"-bien en derecho estatal ya en el artículo **71 bis** de la Ley **30/1992**, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (EDL 1992/17271), a resultas de la modificación operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (EDL 2009/282506), de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y finalmente en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (EDL 2015/166690).

"-bien en **derecho autonómico de Cataluña** en los artículos 34 y siguientes de la Ley 26/2010, de 3 de agosto (EDL 2010/149455), de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de **Cataluña** -sin olvidar la posterior Ley 16/2015, de 21 de julio (EDL 2015/126769), de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de **Cataluña** y de impulso de la actividad económica, así en su artículo 13.6, pero posterior a la titulación habilitante de autos- y demás disposiciones concordantes.

"En ese marco jurídico y para la titulación de actividades de autos (sic) que sin otras alegaciones y otros elementos obliga a estar al régimen general expuesto e interesa recordarlo a la luz de lo establecido en la

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (EDL 2006/318974), relativa a los servicios en el mercado interior, solo puede partirse de que la **comunicación previa** permite el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, y faculta a la administración pública correspondiente para verificar la conformidad de los datos que en ella se contienen - artículo 36.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto (EDL 2010/149455), de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de **Cataluña** y artículo 71 bis.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (EDL 1992/17271), a resultas de la modificación operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (EDL 2009/282506), de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio-.

"Y así con esa titulación habilitante que habilita para el ejercicio de la correspondiente actividad y que por lo demás es perfectamente impugnabile como cualesquiera otra y sin esferas inmunes al control judicial -como los supuestos de silencio administrativo-, debe centrarse el examen en lo dispuesto en el artículo 38 en relación con el artículo 36 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de **Cataluña** .

"Y así las posiciones de las partes se distancian en el sentido de que la administración parece obedecer a la consideración de que la comprobación de la titulación habilitante puede efectuarse en cualquier tiempo inclusive en años y la parte recurrente en que ello es improcedente.

"Pues bien este tribunal entiende que el régimen establecido, que es el general expuesto, no puede ser entendido en una conformación temporal más comprometida, frágil y contraria al principio de seguridad jurídica para su titular y terceros que en sede de licencias o autorizaciones expresas, de tal suerte que la verificación o comprobación de la conformidad de los datos que en ella se contienen en defecto de plazo establecido y hasta por analogía no puede ser reconocido más allá del plazo supletorio de **tres meses** del artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (EDL 1992/17271) -como con posterioridad se establece en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (EDL 2015/166690)-.

"Una vez traspasado ese lapso de tiempo, y en este caso con tanta acentuación por años, deberá, en su caso, actuarse por las vías impugnatorias y garantías de la revisión de oficio u otras que desde luego no se han seguido.

"Por consiguiente, procede estimar el presente recurso de apelación en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva y con estimación del recurso contencioso administrativo y sin condena en costas en primera instancia por no haber méritos para ello por las dudas de hecho y de derecho que suscita el presente caso."

El recurso de casación que se interpone por el Ayuntamiento de Barcelona, a la vista de la decisión y motivación de la sentencia del Tribunal territorial, fue admitido a trámite, determinando que la cuestión que suscita interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia es "determinar si el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las Administraciones Públicas para verificar las declaraciones responsables y las **comunicaciones** que permiten el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, se encuentra sometido a plazo, y en su caso, determinar el mismo, o sí por el contrario, su ejercicio no se encuentra sometido a límite temporal alguno y puede ser ejercitado mientras se ejerza el derecho o se lleve a cabo la actividad comunicada."

A los efectos de dar respuesta a dicha cuestión se consideran que debían ser objeto de interpretación, entre otros que se considerasen pertinentes, los artículos **71 bis** de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (EDL 1992/17271) (reproducido en el actual artículo 69 de la Ley 39/2015 Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (EDL 2015/166690)), en relación con el artículo 42-1º, 2º y 3º de la Ley 30/1992

, (actual artículo 21.1º, 2º y 3º de la Ley 39/2015), con el artículo 39.bis de la Ley **30/1992** (actual (EDL 1992/17271) artículo 4 de la Ley 40/2015 (EDL 2015/167833)), y con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (EDL 2009/251214), sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006 (EDL 2006/318974), relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante Directiva de Servicios).

La Corporación recurrente suplica en este recurso que se declare haber lugar al mismo, se dé respuesta a la cuestión casacional objetiva en el sentido de que las potestades de comprobación, control e inspección para la verificación de las actividades amparadas por una declaración responsable no se encuentran sometidas a límite temporal alguno. Consecuentemente a dicha doctrina se suplica que se anule la sentencia de instancia, se estime el recurso de apelación, se anule la sentencia de instancia en el sentido de que no procede la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo sino que, examinando el fondo de la pretensión originariamente accionada, se desestime dicho recurso y se confirme la resolución inicialmente impugnada.

Han comparecido en el recurso de casación para oponerse, "Sana Degustación, S.L."

## SEGUNDO.

Examen de la cuestión casacional.

La cuestión casacional que se suscita, conforme a lo que ya se ha dicho, es determinar el plazo en el que la Administración competente puede ejercitar las potestades de comprobación, control e inspección de las actividades que se hayan iniciado por los particulares de acuerdo con el régimen de la declaración responsable o **comunicación previa**, conforme a la normativa aplicable. Más concretamente, el centro del debate se suscita en la interpretación que daba darse al artículo **71 bis** de la ya derogada Ley **30/1992** (EDL 1992/17271), ahora reproducido casi literalmente en el actual artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (EDL 2015/166690).

Los mencionados preceptos vienen a establecer en nuestro Derecho el régimen de las autorizaciones que comportan tanto las declaraciones responsables como las **comunicaciones** previas, a las que ya se hacía referencia en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (EDL 2006/318974), Relativa a los Servicios en el Mercado Interior (en adelante, Directiva de Servicios).

Estos medios que habilitan para el ejercicio de un derecho o de una actividad tienen la peculiaridad de que, a diferencia de las clásicas licencias o autorizaciones, su ejercicio por los ciudadanos no requiere un previo acto de la Administración competente que así los declare, tras una previa comprobación de que se reúnen las condiciones para dicho ejercicio del derecho o actividad. En efecto, era tradicional en nuestro ordenamiento jurídico que el ejercicio de derechos o actividades que afectarían, en mayor o menor medida, a los intereses generales, debían someterse a un previo acto de control de la Administración competente, que debía, con carácter previo, autorizar su ejercicio efectivo, garantizando que es acorde a dicho ordenamiento y, en definitiva, garantizar que no se vean afectados esos intereses generales. Ese control ha venido tradicionalmente reservado a los actos autorizatorios, en nuestro Derecho tradicional a las licencias, mediante las cuales el particular que pretenda dicho ejercicio solicita de la Administración competente una expresa autorización de que, en la forma que pretende ejercer el derecho o actividad, se cumplen las exigencias legales, por lo que solo puede iniciarse la actividad o el ejercicio del derecho una vez que la Administración ha constatado, con la aportación por el interesado de la documentación necesaria y las inspecciones oportunas, que el ejercicio que se pretende llevar a cabo está ajustado a las prescripciones legales. En ese sistema, hasta que no se dicte la correspondiente resolución por la Administración, el particular no puede ejercer el derecho o iniciar la actividad. Esa técnica, si bien garantizaban que el ejercicio de las actividades por los ciudadanos estaba garantizado en cuanto se examinaba, con carácter previo a su desarrollo, las exigencias normativas que se establecían, es lo cierto que esa previa actuación administrativa comportaba una importante rémora para el ejercicio de tales actividades.

Esos inconvenientes del sistema de autorización previa, que no era exclusivo de nuestro Derecho, es el que se propuso corregir la Directiva de Servicios, que pretendía precisamente simplificar el acceso a las actividades reguladas, simplificando la actuación de las Administraciones para el control de ese sometimiento a la normativa aplicable. La Directiva de Servicios, en puridad de principios, establece un régimen primario por el cual la regla general es que para el ejercicio de esas actividades o servicios con regulación específica no era necesario obtener esa previa decisión administrativa, ese título habilitante, sería suficiente con que el propio interesado declarase a la Administración que estaba en condiciones para dicho ejercicio, conforme a la propia normativa reguladora, lo cual le habilitaba para hacer efectivo su derecho, con el condicionante de que la Administración podría posteriormente constatar la efectividad de su declaración y, en su caso, denegar el ejercicio de la actividad ya iniciada. Y esa regla general se ve completada, en el régimen de la Directiva de Servicios, con algunas excepciones, bien de concretas actividades en las que no se aplica sus previsiones (las recogidas en los artículos 2 tanto de la Directiva como de la Ley española), o bien sometiendo determinadas actividades al régimen tradicional de las autorizaciones previas, pero siempre que concurren las condiciones que se establecen en el 9 de la Directiva, reproducidos en el artículo 5 de la Ley española, a la que se hará inmediata referencia, que no es preciso examinar aquí por no trascender al debate. Lo que sí es conveniente tomar en consideración es ese doble régimen, el preferente de mera declaración del titular y el especial de autorizaciones previas.

La Directiva fue traspuesta en nuestro Ordenamiento por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (EDL 2009/251214), cuyo objeto, con ocasión de dicha trasposición, según declara su Exposición de Motivos, era " establecer las disposiciones y principios necesarios para garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realizadas en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, simplificando los procedimientos y fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en los servicios, promoviendo un marco regulatorio transparente, predecible y favorable para la actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones Públicas para responder a las necesidades de empresas y consumidores y garantizando una mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios... Los regímenes de autorización son uno de los trámites más comúnmente aplicados a los prestadores de servicios, constituyendo una restricción a la libertad de establecimiento. La Ley establece un principio general según el cual el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización. Únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa cuando no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada una autorización cuando sea suficiente una **comunicación** o una declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la actividad... Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones deberán ser claros y darse a conocer con antelación. Se aplicará el silencio administrativo positivo a estos procedimientos salvo en los casos en los que esté debidamente justificado por una razón imperiosa de interés general ."

Acorde con esa finalidad de la Ley, ya en su artículo 3, siguiendo los dictados de la norma comunitaria, hace una interpretación auténtica de qué debe entenderse por autorización, declaración responsable o régimen de autorizaciones, entre otras definiciones que no son relevantes para nuestro examen. Así mismo, entre otras materias, se contiene una regulación general del régimen y procedimiento de autorizaciones (artículos 5 y 6) y de los requisitos de aplicación excepcional sujetos a evaluación previa (artículo 11).

Lo que interesa al debate de autos es que los principios y mandatos que se imponían en dicha Ley 17/2009, obligaba a realizar "un ejercicio de evaluación de toda la normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio, para adecuarla a los principios que dicha Ley establece" , de manera particular, de las normas del procedimiento administrativo, a cuyos efectos se promulga la relevante y casi coetánea a la anterior, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de Diversas Leyes para su Adaptación (EDL 2009/282506) a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, que en su artículo segundo incluye las modificaciones que al respecto se hacían en la entonces vigente Ley de Procedimiento de 1992, declarando en su Exposición de Motivos la intención del Legislador de incorporar "expresamente la figura de **comunicación previa** y de declaración responsable". Ya veremos como el precepto no deja de ofrecer serias dificultades de interpretación, pero no puede olvidarse que nuestro

Legislador estaba mediatizado por algunos supuestos que ya existían en nuestro Derecho sobre la posibilidad que, en determinados procedimientos administrativos, se autorizaba que la mera **comunicación del interesado** de que reunían unas concretas condiciones que la norma establecía para el reconocimiento de un determinado derecho o el ejercicio de una actividad, era suficiente a los efectos de que se adoptara por la Administración la decisión procedente con el respectivo acto administrativo. Se suele poner de ejemplo de esa posibilidad antes de la reforma de 2009 el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones (EDL 2003/120317), en el cual se imponen determinadas condiciones y prohibiciones para la obtención de subvenciones, estableciendo el precepto no solo dichas condiciones y prohibiciones sino la forma en que los interesados deberán acreditar que no les afectan. Y es en el párrafo cuarto en el que el Legislador impone determinados documentos para dicha acreditación, pero estableciendo la regla residual de que "cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público". Es manifiesto que esa formalidad está muy alejada del nuevo régimen liberalizador instaurado en 2009, por cuando lo que se impone al interesado es la constitución de un título específico, bien que basado en su propia declaración, y en relación con unas concretas pruebas en el seno del correspondiente procedimiento. Ya antes, el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (EDL 2000/83354), autorizaba que determinados requisitos de los contratistas pudieran ser alegados mediante declaración del interesado (solvencia económica y financiera y técnica y profesional en sus artículos 16 y 19), siendo de destacar que en el artículo 21 se establecía una posibilidad de que, ante la falta de una prueba concreta sobre no estar incurso en causa de prohibición para contratar con las Administraciones, pudiera formularse "una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado". Como en el caso de las subvenciones, se trataba de una prueba preconstituida en documento público, bien que fundada en una declaración de voluntad del propio interesado. Ya veremos como dichos precedentes están bien alejados del nuevo sistema que establece en las medidas liberalizadoras de 2009.

La trasposición de la Directiva de Servicios por la Ley 17/2009 solo hizo referencia y definió en su artículo 3 la declaración responsable, como instrumento de liberalización de la prestación de actividades; fue en la posterior Ley 25/2009, la que, al reformar la Ley de procedimiento, añadió las **comunicaciones** previas, con la reforma del artículo 71-bis en la Ley de 1992 que, con ligeras e intrascendentes modificaciones, ha pasado, en lo sustancial, al artículo 69 de la vigente de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (EDL 2015/166690), que será el que nos sirva de referencia para el examen del debate de autos.

Conforme al mencionado precepto, en sus dos primeros párrafos, se dispone:

" Artículo 69. Declaración responsable y **comunicación** .

"1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

"Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

"2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por **comunicación** aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho."

Nuestro Legislador, a la vista del transcrito precepto, asumió con indudable amplitud los principios de la norma comunitaria y así, el precepto se integra en la Sección Tercera del Título IV de la Ley, referido al " inicio del procedimiento a solicitud del interesado " y ciertamente que tanto la declaración responsable como la **comunicación** comportan dicho inicio del procedimiento --en realidad inicio y terminación del mismo-- en el ámbito de una potestad administrativa tradicionalmente reservada a los actos de autorización previos -- licencias y autorizaciones--, ahora limitados a aquellos supuestos que se establecen en la Ley 17/2009, como ya dijimos, ya que en todos los demás supuestos el ejercicio de actividades queda limitado a estos típicos actos, que son de los particulares y que, en puridad de principios, no requieren que la Administración dicte acto administrativo alguno de manera expresa, sin perjuicio de las potestades de control, ex post facto, cuestión que genera no pocas repercusiones (revisiones de oficio).

La regulación de estos actos de los particulares para el ejercicio de actividad ha merecido una encendida crítica por la Doctrina en cuanto el Legislador, tras las definiciones generales del precepto, no establece régimen alguno al que deban someterse tales actos de los particulares lo cual comporta que ha sometido estas declaraciones responsables y **comunicaciones** al criterio de la Legislación sectorial, no solo la estatal sino también la autonómica e incluso la local, en función de las competencias sobre las concretas actividades sometidas a regulación, lo cual impide elaborar una teórica general sobre dichas instituciones. Y para una mejor comprensión de lo que decimos, debemos tener en cuenta que estos actos de autorización están vinculados al ejercicio de derechos o actividades que, por tener una incidencia relevante para bienes o intereses públicos, se encuentran regulados por normas específicas que imponen, no solo el aspecto subjetivo y objetivo para dicho ejercicio, pero también el aspecto formal o de procedimiento; de tal forma que si en el sistema tradicional era a la Administración a quien competía la salvaguarda de tales bienes o servicios y la que debía constatar el cumplimiento de esas exigencias legales antes de iniciar su ejercicio; con el nuevo régimen liberalizador, es el propio ciudadano que pretende el ejercicio de esos derechos o actividades el que deberá constatar y comunicar a la Administración competente que reúne todos los requisitos que impone esa normativa sectorial, en una clara muestra de un ejercicio compartido de la actividad de vigilancia y control administrativo, que ya no es monopolio de la Administración; y será esa normativa sectorial la que determinará también la forma de inicio de dichas actividades o derechos; de tal forma que es el propio ciudadano el que puede ejercitar el derecho o desarrollar la actividad directamente, previa puesta en conocimiento de la Administración de que reúne las condiciones para dicho ejercicio, exigencia que obviamente comporta estar en posesión de todos los documentos que acreditan dicha idoneidad, documentación que si bien no ha de presentar en esa puesta en conocimiento, es lo cierto que debe tener a disposición de la Administración, que tiene la potestad, en cualquier momento posterior al inicio del ejercicio del derecho o actividad, de poder constatar la concurrencia de las exigencias legales. Se trata de un control ex post facto.

Del mencionado precepto de la Ley de 1992 cabe concluir que la declaración responsable, conforme a la propia interpretación literal del precepto --primer criterio interpretativo que impone el artículo 3 del Código Civil (EDL 1889/1)--, comporta que el propio interesado que tiene la intención de ejercer una actividad para la que ostenta el derecho para ejercerla, asume el compromiso de que reúne las condiciones legales para su ejercicio y, lo que es lo más relevante, que está en posesión de la documentación que lo acredita, la cual se pone a disposición de la Administración para cuando le sea requerida. Pero se añade un segundo condicionante, y es el compromiso adoptado frente a la Administración de que se compromete a mantener dichas condiciones del ejercicio de la actividad durante todo el tiempo en que sea efectivo dicho ejercicio. En base al principio que inspira la normativa impuesta por la Directiva de Servicios, los efectos de dicha declaración responsable es que el interesado puede ejercer la actividad sin esperar decisión expresa de la Administración, que es lo que diferencia las figuras tradicionales de la licencia o la autorización; en el bien entendido que dicha eficacia directa de la declaración responsable está condicionada por la potestad de comprobación que, iniciada la actividad, asume la Administración.

Lo expuesto, que fue lo que ya tenemos declarado en nuestra sentencia 1312/2022, de 17 de octubre, dictada en el recurso 3837/2020 (ECLI:ES:TS:2022:3742), ha de servirnos para determinar la auténtica naturaleza de las declaraciones responsables que es lo que está en la base del debate que se suscita en este recurso.

De las anteriores circunstancias debemos concluir que la declaración responsable y la **comunicación previa** constituyen un tertium genus entre el régimen de licencia previa y la libre prestación de servicios sin requisito alguno, porque en tanto que en aquellas hasta que no se obtiene la autorización administrativa (licencia o autorización) no se puede ejercer el derecho o la actividad, y en las segundas el ejercicio no requiere formalidad alguna; en el régimen de declaración responsable o **comunicación previa** el ejercicio de la actividad está condicionada a que el ciudadano ponga en conocimiento de la Administración, de manera preceptiva, no solo esa intención de ejercitar el derecho o iniciar la actividad, sino que está en condiciones de ejercerlo porque reúne las exigencias que impone la normativa sectorial que regula esos derechos o actividad, estando en posesión de la documentación que lo acredita que no es necesario que entregue a la Administración con la **comunicación**, pero sí que la pone a su disposición.

Y en ese sistema intermedio no existe acto concreto de la Administración, ni presunto ni, por supuesto, expreso, sino solo un acto de los particulares interesados en el ejercicio del derecho o la actividad. En tales supuestos, el derecho a ese ejercicio surge directamente de la norma que la regula, la cual prescinde del acto autorizatorio previo.

Si bien las anteriores consideraciones no parece que tenga problema de aceptación, surge la duda con relación con las potestades de la Administración en el sistema de declaración responsable o **comunicación previa**. En tal régimen es manifiesto que la Administración no se desentiende del ejercicio de la actividad, por más que su inicio se deje al criterio de los interesados, sino que el mismo precepto antes mencionado impone que corresponde a la Administración las potestades de " comprobación, control e inspección "; es decir, al igual que ocurre en el sistema de autorización previa, la Administración ha de constatar y comprobar, de ahí la potestad de inspección, que el ejercicio de la actividad se desarrolla conforme al título habilitante, con la peculiaridad de que al existir dicho acto expreso reconociendo el derecho al ejercicio de la actividad, de haberse constatado, a posteriori, la concurrencia coetánea a la autorización concedida, para poder dejar sin efecto dicha autorización será necesario revocar dicho acto autorizatorio, en aplicación de la naturaleza de firmeza de dicho acto administrativo. Y ello sin perjuicio de que constatada la alteración de las condiciones que se impusieron en la autorización, pueda dejarse la misma sin efecto o adoptar medidas de corrección.

Pero ese esquema, ya consolidado en nuestro Derecho, se ve alterado en el supuesto de la declaración responsables y **comunicaciones** previas. Como no hay acto administrativo de ninguna naturaleza ni la Administración ha condicionado el ejercicio del derecho o actividad a decisión alguna, sino que es el propio Legislador, no la Administración, el que autoriza el ejercicio de tales derechos sin mayor condicionante que tales **actos de comunicación**, es el propio Legislador el que le confiere a la Administración la potestad de control e inspección potestades que son consustanciales a los actos autorizatorios de actividades. Pero además de esas potestades, el artículo 69 habla también de potestades de comprobación, es decir, la de " confirmar la veracidad o exactitud de algo " (Diccionario de la Lengua). Pues bien, esa confirmación no puede sino hacer referencia a la potestad de la Administración de poder " corroborar la verdad " de la declaración responsable o de la **comunicación previa**. En suma, se trata de que la Administración pueda, a posteriori, constatar que el contenido de dichos actos de parte son fiel reflejo de lo que se ha comunicado y que el ciudadano ha comenzado el ejercicio del derecho o actividad cumpliendo todas las exigencias que impone la normativa sectorial.

Llegados a ese punto, lo que se sostiene implícitamente por la Sala territorial en la sentencia que se revisa, es que esa potestad de control por la Administración no es indefinida, sino que está sometida a plazo. Y en esa tesitura lo que se razona es que, ante el silencio del Legislador sobre dicho plazo, debe asimilarse al acto presunto y dicho plazo, conforme al actúa artículo 21-2º de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (EDL 2015/166690), debe ser el de **tres meses**. Y para aplicar la analogía se justifica en que se vería afectada de otra forma el principio de seguridad jurídica, de donde llega a la conclusión de que en el caso de autos lo procedente habría sido acudir a la revisión de oficio.

Este Tribunal no puede compartir dicha interpretación. En primer lugar, porque desde el punto de vista estrictamente jurídico-administrativo, es evidente que, si no existe acto alguno de la Administración, tan siquiera un pretendido acto presunto, es indudable que no puede hablarse de una firmeza que requiriese acudir

al procedimiento de revisión de oficio. Cuando existe un acto concediendo la licencia o la autorización, si dicho acto está viciado puede acudirse al procedimiento de revisión de oficio, en su caso. Pero ese esquema no puede aplicarse al régimen de la declaración responsable porque no haya acto.

En segundo lugar, porque es indudable que las potestades de control e inspección han de poder ejercitarse durante todo el tiempo en que dure el ejercicio de la actividad, de donde cabría concluir que, si en esa exigua regulación de estos **actos de comunicación** anticipada se hace referencia conjunta también a las potestades de comprobación, no hay razón alguna para, en una mera interpretación literal del artículo 69 haya de someterse la misma a un plazo que nunca impone el Legislador.

Pero es que, además de lo expuesto, no puede perderse de vista que con estos instrumentos lo que se pretende es, a la vez que se facilita la libre prestación de servicios, que impone la norma comunitaria y nuestra legislación que la traspone, se establezca una gestión compartida entre la Administración y los ciudadanos, dando intervención a estos en la gestión de los servicios (el ejemplo más significativo es la gestión de los tributos en que es el propio ciudadano y obligado al pago el que ha de realizar las correspondientes liquidaciones), es indudable que le es exigible al ciudadano la buena fe que en dichas declaraciones anticipadas de que cumplen las condiciones que la normativa impone para el ejercicio de los derechos o actividades, declaración que es la que esa normativa impone para hacer efectivo ese ejercicio. Pero precisamente por ese actuar responsable, es por lo que la Administración, a la que el Legislador impone aceptar la eficacia de la simple manifestación del ciudadano, esté habilitada para que, en cualquier momento pueda comprobar la veracidad de tales manifestaciones. Es más, de esa comprobación se generarán los efectos que fuesen procedentes en cuanto a la certeza o no de lo declarado.

Esas conclusiones son las que subyacen en los razonamientos que se hacen en nuestra sentencia 1165/2022, de 20 de septiembre, dictada en el recurso de casación 7031/2021 (ECLI:ES:TS:2022:3360) para concluir como doctrina jurisprudencial que como en estos supuestos " no existe ya, propiamente, un procedimiento sometido al régimen de autorización (esto es, un procedimiento que deba iniciarse con una solicitud del interesado y deba finalizar con una resolución favorable de la Administración), por haber sido sustituido normativamente por el régimen de la declaración responsable y la **comunicación previa** , lógico será concluir que existe una dificultad conceptual -más bien, imposibilidad- para aplicar directamente a la **comunicación previa** las causas de suspensión del plazo para resolver, que están previstas para aquellos procedimientos. De aquí que proceda dar respuesta a la concreta cuestión de interés casacional suscitada señalando que no cabe aplicar a las **comunicaciones** previas a que se refiere el artículo 69.2 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690) la causa de suspensión del plazo máximo para resolver prevista en el artículo 22.1.g) de la misma ley . "

Es más, si debiera entenderse que era necesaria la actuación administrativa antes de proceder al inicio de la actividad cuando se someta a la **comunicación previa** o declaración responsable, nos encontraríamos con un régimen de autorización, como se razona en el fundamento 39 de la Directiva de Servicios, porque dicha "decisión implícita derivada", equivale a una previa autorización, con los efectos que ello comporta.

Hemos de concluir de lo expuesto que las potestades de comprobación en una declaración responsable o **comunicación previa** , conforme a la normativa general en vigor, no está sujeta a plazo alguno y puede realizarse durante todo el tiempo de ejercicio del derecho o de la actividad a que se refieren dichos actos del ciudadano.

### **TERCERO.**

Examen de la pretensión.

El orden de los pronunciamientos que nos impone el artículo 93 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (EDL 1998/44323) comporta que debamos proceder ahora al examen de la pretensión accionada en el proceso. En ese examen hemos de tomar en consideración lo antes concluido con relación a la cuestión casacional objetiva.

La pretensión que inicialmente su suplicó ante el Juzgado, como ya hemos visto, estaba referida a la petición de que se anulase la resolución municipal dejando sin efecto la **comunicación previa** de ejercicio de la actividad de despacho de pan con degustación. Ya también se dijo que dicha resolución, que no había sido examinada en la primera instancia porque se declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, fue anulada por la sentencia de la Sala territorial de **Cataluña** en la sentencia que aquí se revisa, contra la que se alza a este Tribunal Supremo el Ayuntamiento de Barcelona, con los argumentos que ya se dijeron anteriormente, y que lo ahora pretendido es que este Tribunal, declarando haber lugar al recurso de casación, anule la sentencia recurrida y deje sin efecto la resolución originariamente impugnada.

La respuesta que hemos dado a la cuestión casacional objetiva comporta la aceptación de la petición del Ayuntamiento recurrente y acceder a lo suplicado. El supuesto fáctico de las actuaciones administrativa que se impugnan está referido, como cabe concluir de lo expuesto, a una declaración responsable para el ejercicio de la actividad ya mencionada. Es de suponer que, como no se niega, esa declaración responsable contenía la afirmación de la solicitante de que estaba en posesión de la documentación en virtud de la cual reunían todas las condiciones que la normativa sectorial impone para dicho ejercicio. Pues bien, comprobada dichas circunstancias se constata que existía una incompatibilidad para el ejercicio de la actividad en el concreto local en que se había instalado, precisamente porque la normativa urbanística imponía una concreta densidad para el ejercicio concreto de esa actividad en la zona, lo cual no se niega en ningún momento. Y esa circunstancia se trae a las actuaciones mediante una certificación de los servicios municipales, certificación que con la declaración responsable, implícitamente la interesada en el ejercicio de la actividad había comunicado al Ayuntamiento que estaba en posesión, lo cual se ha constatado que no era cierto. Es decir, en puridad de principios el mismo solicitante, intencional o negligentemente, declaró a la Administración reunir todas las condiciones para el ejercicio de la actividad cuando era lo cierto que no se reunían dichas condiciones.

Y a tales circunstancias que, insistimos no se niegan, no puede oponerse que el Ayuntamiento no procedió a realizar esa comprobación en un plazo inmediatamente posterior al inicio de la actividad porque, como antes hemos concluido, de una parte, ninguno de los preceptos que regula estas declaraciones responsables o **comunicaciones** previas pone plazo perentorio alguno para ello, de otra, que la obligación que quien había iniciado la actividad sin acto expreso de autorización municipal, no solo declaró que reunía las condiciones para su ejercicio, sino que estaba en posesión de la documentación que lo acreditaba durante todo el tiempo en que se ejerciera. Y esas declaraciones implícitas se ha constatado que no eran ciertas, por lo que la decisión municipal de denegar los efectos de dicha actividad se impone como la causa directa de la propia actuación de quien inició una actividad en condiciones de irregularidad.

No se trata, como en la sentencia de instancia se argumenta, de que el Ayuntamiento, con su decisión esté dejando sin efecto acto alguno que autorizase el ejercicio de la actividad, porque en este sistema de **comunicación** preliminares al ejercicio, como ya argumentamos, no existe acto alguno, sino que es el propio ciudadano interesado en su ejercicio el que asume el riesgo, con las indudables ventajas, de comenzar la actividad sin esperar que la Administración le autorice. Lo que existe es, en palabras del artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (EDL 2015/166690), es una actividad de comprobación que ha demostrado que la declaración era incompleta y contraria a la normativa aplicable.

Las anteriores consideraciones obligan a la declaración de haber lugar al recurso, anular la sentencia de instancia y, dictando otra en sustitución, estimar el recurso de apelación y anular la sentencia de primera instancia, desestimando el recurso contencioso-administrativo por estar el acto originariamente impugnado ajustado al ordenamiento jurídico.

#### **CUARTO.**

Costas procesales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.4º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (EDL 1998/44323), no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, al

no apreciarse temeridad o mala fe en las partes. Por lo que se refiere a las costas ocasionadas en la instancia, la estimación del recurso comporta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (EDL 1998/44323), no procede tampoco hacer concreta imposición de las costas procesales, ni en la primera instancia ni en el recurso de apelación.

## FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Primero. La respuesta a la cuestión casacional objetiva para la formación de la jurisprudencia es la reseñada en el fundamento segundo "in fine".

Segundo. Conforme a dicha cuestión, ha lugar al presente recurso de casación 8658/2021, interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de **Cataluña**, mencionada en el primer fundamento, que se declara sin valor ni efecto alguno.

Tercero. En su lugar, estimando el recurso de apelación a que se hace referencia en la sentencia recurrida, se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Sana Degustación, S.L." y "Aguilean, S.L.", contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, mencionado en el primer fundamento, que se confirma por estar ajustado al ordenamiento jurídico.

Cuarto. No procede hacer expresa condena en cuanto a las costas de este recurso ni de las ocasionadas en la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

**Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130052023100035**



## Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona

Acord del Consell Plenari de 30-3-2001

Text consolidat. Inclou les modificacions posteriors

### *TÍTOL PRELIMINAR* *Disposicions generals*

## *Article 1. Objecte*

1. Amb caràcter general, aquesta Ordenança regula els procediments d'intervenció, prevenció i control de les activitats, públiques i privades, que es realitzen en el terme municipal de Barcelona, d'acord amb les normes urbanístiques, ambientals i sectorials que els siguin d'aplicació.
2. En particular, aquesta Ordenança té per objecte regular els procediments de prevenció i control integrats adreçats a la protecció del medi ambient, la seguretat i la salut pública, de conformitat amb la Llei Catalana 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, del seu Reglament general de desplegament, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, i de les demés normes, estatals o autonòmiques, aprovades en compliment de la Directiva 96/61/CE del Consell de la Unió Europea, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.

## *Article 2. Definicions*

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:

1. Activitat: conjunt d'operacions o tasques de caràcter industrial, comercial, professional o de serveis, que s'exerceixen o exploten en un centre o establiment.
2. Centre o establiment: conjunt d'instal·lacions que s'ubiquen en un emplaçament determinat en els que s'exerceix o explota una o vàries activitats.
3. Emplaçament: espai físic delimitat i diferenciat en el que s'ubica un establiment o centre.
4. Instal·lació: conjunt d'edificacions, d'equipaments, de maquinària i d'infraestructures de què es compon un establiment o centre on s'exerceixen o exploten una o diverses activitats. També poden tenir la consideració d'instal·lació les de caràcter particular, no vinculades a cap activitat, però sotmeses a algun tipus de llicència o a comunicació prèvia.
5. Canvi substancial: qualsevol modificació de l'activitat autoritzada que pugui tenir repercussions perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi ambient i, en tot cas, les modificacions o les ampliacions que impliquin un canvi del codi en el que hagi estat classificada l'activitat en aplicació dels Annexes I, II, III.1, III.2 o III.3 d'aquesta Ordenança, tant si aquest canvi es produeix en relació al mateix Annex o a un Annex diferent. També es considerarà canvi substancial qualsevol modificació que alteri desfavorablement les condicions exigides pel Codi d'Accessibilitat de Catalunya o quan, sense alterar la inclusió de l'activitat en un Annex d'aquesta Ordenança, signifiqui el seu canvi de classificació en relació a les que estableix el Pla General Metropolità o la normativa sectorial aplicable o la necessitat de complir condicions addicionals.
6. Canvi no substancial: modificació de l'activitat autoritzada que no tingui repercussions perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi ambient, i/o que no impliqui un canvi del codi en el que hagi estat classificada l'activitat en aplicació dels

Annexos I, II, III.1, III.2 o III.3 d'aquesta Ordenança, ni en relació al mateix Annex ni a un Annex diferent. Tampoc es consideraran canvis substancials aquelles modificacions que no alterin desfavorablement les condicions exigides pel Codi d'Accessibilitat de Catalunya o quan no impliquin el seu canvi de classificació en relació a les que estableix el Pla General Metropolità, o no calgui complir condicions addicionals.

7. Altres llicències urbanístiques: quan aquesta Ordenança fa esment d'altres llicències urbanístiques o a la llicència d'obres, cal entendre que es refereix a les necessàries per a realitzar un o varis dels actes subjectes a llicència als que es refereix l'article 11.1 de les Ordenances Metropolitanas d'Edificació, llevat dels següents:

a) els de l'apartat m) del referit article 11.1 de les Ordenances Metropolitanas d'Edificació, relatius a la instal·lació, obertura, modificació, ampliació o transformació d'establiments comercials o industrials i magatzems, així com la modificació, substitució o canvi de lloc de màquines, motors i altres aparells industrials.

b) els de l'apartat ñ) del mateix article 11.1 de les Ordenances Metropolitanas d'Edificació, pel que fa a la realització de qualsevol dels actes assenyalats als Plans d'ordenació referits a activitats i instal·lacions, el règim d'intervenció les quals és el que es regula en aquesta Ordenança.

### *Article 3. Qualificació de les activitats*

1. Amb caràcter general, totes les activitats es consideren potencialment susceptibles d'afectar la seguretat, la salut pública o el medi ambient.
2. Només tenen la consideració d'innòcues les activitats que es relacionen en l'Annex III.3, d'activitats innòcues, d'aquesta Ordenança.

### *Article 4. Procediments d'intervenció administrativa de les diferents classes d'activitats*

1. El procediment general d'intervenció de les activitats és el de comunicació prèvia, que és d'aplicació a les activitats que es relacionen a l'Annex III.3 i a l'Annex III.2 d'aquesta Ordenança.
2. A les activitats de l'Annex III.1 d'aquesta Ordenança els és d'aplicació el procediment de llicència municipal d'obertura d'establiment i de control ambiental.
3. A les activitats de l'Annex II d'aquesta Ordenança els és d'aplicació el procediment de llicència ambiental municipal i de control ambiental.
4. Les activitats de l'Annex I d'aquesta Ordenança resten sotmeses al procediment especial d'autorització ambiental municipal i de control ambiental.

5. Les altres autoritzacions, llicències o permisos municipals que la legislació sectorial i/o les ordenances municipals exigeixin per a determinades activitats es sol·licitaran, tramitaran i resoldran conjuntament i simultània amb els procediments de llicència d'obertura d'establiment, de llicència o autorització ambiental contemplats en els paràgrafs anteriors.

6. De conformitat amb els articles 12 c) i 22.1 de la Llei 3/1998 i amb les Disposicions Addicionals 4, 5 i 6 del Decret 136/1999, el procediment d'avaluació i declaració de l'impacte ambiental de les activitats que hi estiguin sotmeses s'integra en el procediment d'autorització ambiental o de llicència ambiental.

### *Article 5. Competència municipal*

1. De conformitat amb allò que estableix l'article 71 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la resolució de tots els procediments previstos a l'article anterior, inclòs el d'autorització ambiental, correspon a l'Ajuntament de Barcelona.

2. Els informes preceptius que, en determinats procediments de llicència o d'autorització, hagi d'emetre la Ponència Ambiental o altres òrgans consultius de l'Administració de la Generalitat, poden ser objecte de delegació a l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò que també estipula al respecte el mateix article 71 de la Carta Municipal de Barcelona.

### *Article 6. Ponència Ambiental Municipal*

1. La Ponència Ambiental Municipal és l'òrgan col·legiat que exerceix les funcions que li encomana aquesta Ordenança en matèria d'intervenció integral de l'administració ambiental.

2. En particular, la Ponència Ambiental Municipal la funció d'interpretació normativa i tècnica envers la prevenció de la contaminació per mitjà de l'aplicació de les millors tècniques disponibles.

3. La Ponència Ambiental Municipal es crea i es regula per Decret de l'Alcaldia.

### *Article 7. Comprovació prèvia de la classificació i del procediment*

1. Amb caràcter previ a l'inici dels procediments contemplats a l'article anterior i a la sol·licitud corresponent, l'interessat pot demanar a la Ponència Ambiental Municipal, o l'òrgan en qui delegui, ha de facilitar la comprovació relativa a la inclusió de l'activitat projectada, o de la modificació de la mateixa, en l'Annex corresponent d'aquesta Ordenança, i al procediment que, en conseqüència, ha de seguir.

2. Als efectes d'aquesta comprovació, els interessats han de presentar documentació en la es faci la descripció de la naturalesa i principals característiques de l'activitat prevista; de

les instal·lacions, maquinària i productes a utilitzar, emmagatzemar i produir; de les fonts, tipus i magnitud de les emissions; i dels riscos per a la salut i la seguretat.

3. La comprovació que faciliti l'Ajuntament serà emesa, únicament i exclusiva, en relació a les dades i a la documentació presentades per l'interessat i no tindrà, en cap cas, caràcter vinculant envers el procediment que posteriorment es segueixi.

### *Article 8. Activitats que no es poden exercir a Barcelona*

D'acord amb allò que disposen al respecte el Pla General Metropolità i l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà, està prohibit en el tot el terme municipal de Barcelona l'exercici de les activitats següents:

- a) Activitats nuclears, incloses les de transport, així com les activitats radioactives qualificades com de primera categoria pel Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.
- b) Activitats ramaderes.
- c) Activitats extractives o mineres.

## *TÍTOL I*

### *Règim general de comunicació prèvia i règim de la llicència municipal d'obertura d'establiment*

#### *CAPÍTOL I*

##### *Disposicions generals*

### *Article 9. Delimitació dels règims de comunicació prèvia i de llicència municipal d'obertura d'establiment*

1. Està sotmès al procediment de comunicació prèvia l'exercici de les activitats següents:

- a) Les activitats innòcues que es relacionen a l'Annex III.3 d'aquesta Ordenança, i.
- b) Les activitats incloses a l'Annex III.2 d'aquesta Ordenança.

2. L'exercici de les activitats que es relacionen a l'Annex III.1 d'aquesta Ordenança, està sotmès al règim de llicència municipal d'obertura d'establiment.

### *Article 10. Abast i limitacions de la comunicació prèvia*

1. La comunicació prèvia a l'inici de l'activitat s'ha de formalitzar una vegada finalitzades les obres i instal·lacions que calgui per a l'exercici de l'activitat, amb l'establiment o la instal·lació en les condicions reals de funcionament. Aquestes obres i instal·lacions han d'estar emparades, quan calgui, per la corresponent llicència urbanística o pel compliment del requisit de comunicació prèvia en el cas d'obres exemptes de la referida llicència.

2. La comunicació prèvia no faculta, en cap cas, per exercir activitats, en contra de l'ordenament i del planejament urbanístics, ni la de normativa sectorial que sigui d'aplicació,

o que comportin la transferència al titular de l'activitat o a tercers de facultats relatives al domini públic o al servei públic.

3. L'exercici de l'activitat resta condicionada, si s'escau, a l'obtenció de l'autorització d'abocament d'aigües residuals al clavegueram de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, o de l'Agència Catalana de l'Aigua si l'abocament és a la llera pública o al mar.

4. En cas de disconformitat de l'activitat, o de modificació posterior, respecte del projecte o documentació tècnica presentats, l'Administració municipal, prèvia la corresponent inspecció, disposarà la suspensió si l'activitat requerís alguna de les llicències o autoritzacions contemplades en aquesta Ordenança, o bé si, requerit l'interessat per corregir, en un temps raonable, les deficiències que l'Administració municipal pugui haver observat, transcorre el termini atorgat sense haver-les esmenat.

## *CAPÍTOL II*

### *Règims de comunicació prèvia*

#### *SECCIÓ 1<sup>a</sup>. RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LES ACTIVITATS*

##### *INNÒCUES DE L'ANNEX III.3*

###### *Article 11. Documentació i procediment*

1. En el cas de les activitats innòcues que es relacionen a l'Annex III.3 d'aquesta Ordenança, a la comunicació prèvia s'hi han d'acompanyar, com a mínim, els documents següents:

a) La descripció de l'activitat i de les seves instal·lacions per mitjà documentació tècnica gràfica i escrita, en la qual s'inclourà informació sobre les dades de l'empresa. Pel que fa a les condicions d'emplaçament urbanístic del local i les seves instal·lacions, aquesta documentació tècnica ha de reflectir les seves característiques en relació al compliment de la normativa d'aplicació.

b) Document acreditatiu de la forma de recollida i gestió dels residus i, en particular de la fracció orgànica i dels envasos i residus d'envasos industrials i comercials; o bé acreditació d'haver sol·licitat a l'Ajuntament que es faci càrrec d'aquells residus susceptibles de ser gestionats pel servei municipal de recollida, d'acord amb allò que estableixin al respecte l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà i l'Ordenança de la taxa, preu públic o tarifa corresponent.

c) Resguard acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés de la quota de la taxa per tramitació de l'expedient, si així ho estableix la corresponent Ordenança fiscal.

2. En el cas que l'activitat que es pretén exercir estigui inclosa en l'Annex III.6 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, cal afegir a la documentació indicada en el paràgraf anterior l'estudi d'impacte acústic regulat a l'article 62 de la referida Ordenança municipal.

3. Si l'activitat que es pretén exercir no és compatible, totalment o parcial, amb el planejament urbanístic en vigor, caldrà acreditar, a més a més, que es compleixen les condicions que, en cada cas, estableixi la legislació urbanística per a les llicències de caràcter provisional amb clàusula de precari, i que s'ha formalitzat la renúncia a la indemnització que pogués correspondre en cas d'expropiació o d'execució del planejament.

#### *Article 12. Inici de l'activitat*

**L'exercici o l'explotació de les activitats innòcues de l'Annex III.3 d'aquesta Ordenança es pot iniciar un cop transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació al Registre General de l'Ajuntament.**

#### *Article 13. Obligacions generals dels titulars d'activitat innòcues*

1. Els titulars de les activitats innòcues han d'ajustar-se a les condicions indicades en la comunicació, i garantir que els centres o establiments i les instal·lacions reuneixen les condicions de tranquil·litat, seguretat, salubritat i d'altres exigides per les Ordenances municipals, els plans urbanístics i sectorials i l'ordenament jurídic, estatal o autonòmic, que els sigui d'aplicació.

2. Les activitats innòcues no estan sotmeses a cap regim de control ni de revisions periòdiques, això sense perjudici que l'Administració municipal pugui exercir, en qualsevol moment, la seva potestat d'inspecció.

3. En el supòsit que, sense que es tracti d'un canvi substancial, es pretengui modificar les característiques o les condicions exigides per la normativa general o sectorial, caldrà formular una nova comunicació prèvia.

### **SECCIÓ 2<sup>a</sup>. CERTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LES ACTIVITATS DE L'ANNEX III.2**

#### *Article 14. Documentació i procediment*

1. Per a l'exercici de les activitats classificades a l'Annex III.2 d'aquesta Ordenança, la comunicació prèvia ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

- a) Projecte tècnic, redactat per tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional, amb la descripció de l'activitat i les seves instal·lacions per mitjà documentació tècnica gràfica i escrita. Pel que fa a les condicions d'emplaçament urbanístic del local i de les seves instal·lacions, aquesta documentació tècnica ha de reflectir les seves característiques en relació al compliment de la normativa d'aplicació.
- b) Document acreditatiu d'haver sol·licitat, si s'escau, l'autorització d'abocament d'aigües residuals a l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus si el desguàs és al clavegueram o l'Agència Catalana de l'Aigua si l'abocament és a la llera pública o al mar.
- c) Document acreditatiu de la forma de recollida i gestió dels residus i, en particular de la fracció orgànica i dels envasos i residus d'envasos industrials i comercials; o bé acreditació

d'haver sol·licitat a l'Ajuntament que es faci càrrec d'aquells residus susceptibles de ser gestionats pel servei municipal de recollida, d'acord amb allò que estableixin al respecte l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà i l'Ordenança de la taxa, preu públic o tarifa corresponent.

- d) Documents determinats a l'Annex IV.B del Decret 136/1999, o norma que el substitueixi, en el cas d'activitats amb risc d'incendi i, en tot cas, documentació que justifiqui el compliment de la normativa en vigor en matèria de prevenció d'incendis.
- e) Relació d'instal·lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial, amb indicació de la reglamentació aplicable a cada instal·lació, i amb les certificacions corresponents a les diferents reglamentacions i instal·lacions.
- f) Certificació tècnica relativa a l'execució del projecte, lliurada per tècnic competent i visada pel corresponent col·legi professional.
- g) Certificació tècnica de conformitat, lliurada per una entitat ambiental de control.
- h) Resguard acreditatiu d'haver satisfet la quota de la taxa per la tramitació del procediment, d'acord amb allò que disposi la corresponent Ordenança fiscal.

2. En el cas que l'activitat que es pretén exercir estigui inclosa en l'Annex III.6 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, cal afegir a la documentació indicada en el paràgraf anterior l'estudi d'impacte acústic regulat a l'article 62 de la referida Ordenança municipal.

3. Si l'activitat que es pretén exercir no és compatible, totalment o parcial, amb el planejament urbanístic en vigor, caldrà acreditar, a més a més, que es compleixen les condicions que, en cada cas, estableixi la legislació urbanística per a les llicències de caràcter provisional amb clàusula de precari, i que s'ha formalitzat la renúncia a la indemnització que pogués correspondre en cas d'expiació o d'execució del planejament.

### *Article 15. Projecte tècnic*

Per a les activitats de l'Annex III.2 d'aquesta Ordenança, el projecte tècnic que cal acompanyar a la comunicació prèvia ha de complimentar el contingut mínim següent:

- A) Dades bàsiques de l'empresa i del centre o establiment.
- B) Memòria justificativa amb informació i dades suficients sobre:
  - a) Descripció de l'activitat projectada amb expressió de les instal·lacions, els consums d'aigua combustible i energia, les matèries primeres, els productes intermedis i els productes finals, amb expressió de les seves característiques, quantitats consumides o produïdes i emmagatzemades i forma d'emmagatzematge.

- b) Focus emissors amb expressió de la seva ubicació, característiques i caracterització de les emissions, acreditació de l'absència d'efectes contaminants o justificació de la innocuïtat de les emissions a l'atmosfera, i de les emissions de pols, de sorolls, de vibracions, de calor, d'olors, de residus i d'aigües residuals.
- c) Generació de residus amb expressió de la seva caracterització, producció estimada, gestió i destinació previstes.
- d) Tècniques de prevenció i sistemes de control de les emissions.
- e) Sistemes de depuració i correcció.
- f) Compliment de la normativa urbanística, de prevenció d'incendis i sectorial que sigui d'aplicació. C) Informació gràfica amb:

- a) Plànol d'emplaçament.
- b) Plànols detallats de les instal·lacions, en planta i alçat.

D) Descripció del medi potencialment afectat per les emissions.

#### *Article 16. Certificacions tècniques*

1. La certificació tècnica que, visada pel corresponent col·legi professional, ha de lliurar el tècnic competent s'ha de referir, com a mínim, a l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte tècnic presentat i a l'ordenament i reglamentacions tècniques que siguin d'aplicació.
2. La certificació de conformitat, lliurada per l'entitat ambiental de control s'ha de referir, com a mínim, als extrems següents:
  - a) Comprovació del compliment de les normes generals, sectorials i tècniques que sigui d'aplicació en l'execució del projecte.
  - b) Pràctica dels mesuraments, les anàlisis i les comprovacions necessàries per verificar l'observança dels nivells d'emissió i de les prescripcions sobre gestió de residus, amb especificació dels resultats obtinguts, tant pel que fa a la protecció del medi ambient com de prevenció d'incendis i protecció de la salut pública.
  - c) Verificació que s'han complimentat tots els documents exigits en els apartats b), c), d) i e) de l'article 14.1 d'aquesta Ordenança municipal, així com de l'estudi d'impacte acústic al que es refereix l'article 14.2 de la mateixa Ordenança si és el cas.

3. El contingut i el règim d'expedició de les certificacions relatives a la seguretat industrial, a les que es refereix l'apartat e) de l'article 14.1 d'aquesta Ordenança són els que s'estableix a la reglamentació tècnica de cada instal·lació.

#### *Article 17. Inici de l'activitat*

L'exercici o l'explotació de les activitats de l'Annex III.2 d'aquesta Ordenança es pot iniciar un cop transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació, amb la documentació que l'acompanya, al Registre General de l'Ajuntament.

#### *Article 18. Controls periòdics*

1. Les activitats de l'Annex III.2 d'aquesta Ordenança resten sotmeses a control periòdic cada deu anys, efectuats d'acord amb els articles 73 i 82 d'aquesta Ordenança.

2. En el supòsit que, sense que es tracti d'un canvi substancial, es pretengui modificar les característiques o les condicions exigides per la normativa general o sectorial, caldrà formular una nova comunicació prèvia.

3. Tanmateix, si l'activitat és objecte de modificacions que fan que revesteixi les característiques d'una activitat de les que es relacionen en els Annexos I, II o III.1 d'aquesta Ordenança, l'activitat en qüestió es considerarà clandestina mentre no obtingui la corresponent llicència o autorització ambientals, o bé la llicència municipal d'obertura d'establiment.

### *CAPÍTOL III*

#### *Règim de la llicència municipal d'obertura d'establiment*

##### *Article 19. Àmbit d'aplicació*

1. A l'empara d'allò que preveu l'article 41.3 de la Llei 3/1998, les activitats incloses a l'Annex III.1 d'aquesta Ordenança, en el seu primer establiment o quan siguin objecte d'un canvi substancial definit a l'article 2 d'aquesta Ordenança, es sotmeten a llicència municipal d'obertura d'establiment.

2. La llicència municipal d'obertura d'establiment s'ha de sol·licitar, tramitar i resoldre, conjuntament i simultània, en el seu cas, amb la llicència d'obres i amb qualsevol altra llicència o autorització municipal regulada per la legislació sectorial o per Ordenances municipals en funció del tipus d'activitat.

##### *Article 20. Sol·licitud*

1. La sol·licitud de la llicència municipal d'obertura d'establiment i, si és el cas, de la llicència d'obres i d'altres autoritzacions i llicències municipals, s'ha de presentar acompanyada de la documentació següent:

a) L'exigida per la legislació urbanística i/o per l'ordenament sectorial, als efectes d'allò que preveu el paràgraf 2

de l'article anterior.

- b) Projecte tècnic, per triplicat exemplar, redactat per tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional. El contingut mínim d'aquest projecte tècnic és el mateix que exigeix l'article 15.1 d'aquesta Ordenança.
- c) Document acreditatiu d'haver sol·licitat, si s'escau, l'autorització d'abocament d'aigües residuals a l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus si el desguàs és al clavegueram o l'Agència Catalana de l'Aigua si l'abocament és a la llera pública o al mar.
- d) Document acreditatiu de la forma de recollida i gestió dels residus i, en particular de la fracció orgànica i dels envasos i residus d'envasos industrials i comercials; o bé acreditació d'haver sol·licitat a l'Ajuntament que es faci càrrec d'aquells residus susceptibles de ser gestionats pel servei municipal de recollida, d'acord amb allò que estableixin al respecte l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà i l'Ordenança de la taxa, preu públic o tarifa corresponent.
- e) Documents determinats a l'Annex IV.B del Decret 136/1999, o norma que el substitueixi, en el cas d'activitats amb risc d'incendi i, en tot cas, documentació que justifiqui el compliment de la normativa en vigor en matèria de prevenció d'incendis.
- f) Relació d'instal·lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial amb indicació de la reglamentació aplicable a cada instal·lació.
- g) Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l'activitat, del tècnic que assumirà la responsabilitat de l'execució del projecte i que lliurarà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada. Aquest document, visat pel corresponent col·legi professional, ha de contenir el nom de la persona designada, la seva titulació i l'adreça professional.
- h) Resguard acreditatiu d'haver satisfet la quota de la taxa per la tramitació del procediment, d'acord amb allò que disposi la corresponent Ordenança fiscal.

2. En el cas que l'activitat que es pretén exercir estigui inclosa en l'Annex III.6 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, cal afegir a la documentació indicada en el paràgraf anterior l'estudi d'impacte acústic regulat a l'article 62 de la referida Ordenança municipal.

### ***Article 21. Esmena de la sol·licitud i comunicació de la recepció***

1. L'Ajuntament, en un termini de deu dies, verificarà la documentació presentada per comprovar si s'ajusta als requisits contemplats a l'article anterior. En cas de defecte de la sol·licitud, manca de dades, de documentació necessària o de resguard acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'Ajuntament requerirà a l'interessat perquè en un termini no superior a deu dies, esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius, amb

indicació que, si així no ho fa se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, cosa que es reflectirà en la resolució expressa que es dicti.

2. Dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, es comunicarà a l'interessat la recepció de la seva sol·licitud de llicència municipal d'obertura d'establiment, la data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l'òrgan competent, el termini màxim per atorgar i notificar aquesta llicència i, si escau, la llicència urbanística i, els efectes del silenci administratiu.

3. Quan s'observin deficiències en la sol·licitud o documentació complementària, el requeriment d'esmenes previst al paràgraf 1 d'aquest article contindrà, a més, la informació a què fa referència el paràgraf 2 anterior.

4. Transcorregut el termini atorgat a l'interessat, sense que aquest hagi complementat o esmenat les mancances advertides, es declararà i notificarà al sol·licitant el desestiment de la seva sol·licitud, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

### *Article 22. Denegació de la llicència per vulneració de la legalitat urbanística*

Practicat el tràmit anterior i previ informe urbanístic sobre la compatibilitat amb el planejament si no s'ha sol·licitat llicència d'obres, l'òrgan municipal competent denegarà la llicència municipal d'obertura d'establiment i, si també s'ha sol·licitat, la llicència d'obres per vulneració de la legalitat urbanística.

### *Article 23. Informació veïnal*

1. Si el tràmit contemplat a l'article anterior es supera favorablement, s'iniciarà el període d'informació veïnal, per un termini de deu dies, a fi que les persones que es considerin afectades per l'activitat que es pretengui implantar o modificar substancialment, pugin formular les al·legacions o suggeriments pertinents.

2. Als efectes d'aquesta informació veïnal, es consideren persones afectades els propietaris, els posseïdors i els arrendataris d'immobles confrontants amb l'emplaçament de l'activitat projectada. En el cas d'immobles dividits en règim de propietat horitzontal, la notificació als afectats es du a terme per mitjà de notificació al president de la comunitat de propietaris.

3. Si es tracta d'activitats de nova implantació, la informació veïnal es complementa amb la col·locació d'un cartell que s'ha de situar al lloc on es pretén emplaçar l'activitat i de cara a la via pública principal que hi dona accés. Aquest cartell ha de contenir el número de l'expedient municipal, el nom de l'empresa sol·licitant de la llicència, el títol del projecte i el període d'informació veïnal. El cartell ha de ser llegible des de la via pública, la seva instal·lació va a càrrec del titular de l'activitat projectada, i ha d'estar col·locat durant tot el període de la informació veïnal.

### *Article 24. Informes municipals*

1. Transcorregut el termini d'informació veïnal, l'expedient serà sotmès a l'informe de la Ponència Ambiental Municipal i a l'informe dels altres òrgans municipals pertinents a fi que, en el termini màxim d'un mes, es dictamini sobre tots els aspectes de la instal·lació projectada, l'eventual llicència urbanística, i les al·legacions o suggeriments presentats en el tràmit d'informació veïnal.
2. En el seu informe, Ponència Ambiental Municipal vetllarà, en particular, per al compliment de les prescripcions de l'article 162.1 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, en ordre a què les activitats que així ho requereixen disposin del corresponent espai per a l'emmagatzematge de residus.

### *Article 25. Proposta de resolució*

1. A la vista dels informes emesos, el responsable de l'expedient formularà la corresponent proposta de resolució de la llicència municipal d'obertura d'establiment i, si és el cas, de la llicència d'obres i/o de les altres autoritzacions o llicències municipals.
2. La proposta de resolució ha d'ésser notificada als interessats atorgant un termini de deu dies per fer les al·legacions que es considerin oportunes. Es podrà prescindir d'aquest tràmit d'audiència quan no s'hagin presentat al·legacions desfavorables a la instal·lació de l'activitat durant el tràmit d'informació veïnal, sempre i quan no figurin en el procediment ni siguin tingudes en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat i, la resolució sigui favorable a l'atorgament de la llicència municipal d'obertura d'establiment i, si escau, de la llicència urbanística i/o de les altres llicència o autoritzacions municipals.

### *Article 26. Resolució*

1. L'òrgan municipal competent, un cop valorades les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència i la resta d'actuacions practicades a l'expedient, resoldrà sobre l'atorgament o denegació de la llicència municipal d'obertura d'establiment i, si escau, de la corresponent llicència urbanística i/o de les altres autoritzacions o llicències municipals, de forma motivada.
2. La llicència municipal d'obertura d'establiment es podrà denegar per raons urbanístiques quan aquestes no hagin estat detectades a l'inici de l'expedient.
3. La resolució administrativa que atorgui o denegui la llicència o llicències es notificarà als interessats. En la notificació que es practiqui sol·licitant se l'indicarà que pot passar a recollir a les oficines municipals, en horari d'oficina, la llicència o llicències atorgades, així com una còpia segellada del projecte tècnic i se l'advertirà que en cap cas podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagi dut a terme l'actuació de control inicial de l'activitat regulada en aquesta Ordenança.

4. Quan s'atorgui la llicència d'obres de forma simultània a la llicència municipal d'obertura d'establiment es practicarà, al mateix temps, la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

### *Article 27. Termini*

1. La resolució sobre l'atorgament o la denegació de la llicència municipal d'obertura d'establiment i, si escau, de la llicència d'obres es dicta i notifica a l'interessat en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament.

2. Excepcionalment, atenent la complexitat de l'expedient, el nombre de sol·licituds o de persones afectades, l'òrgan municipal competent pot prorrogar el termini de tres mesos, per un període que no superior a tres mesos més, mitjançant resolució motivada que haurà de ser notificada als interessats.

3. El termini queda interromput en el cas que es demani esmena o millora de documentació, així com en la resta de supòsits que contempla l'article 42.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Si, un cop transcorreguts els terminis establerts en els paràgrafs anteriors, no ha recaigut la resolució o resolucions expresses sobre les sol·licituds presentades, o no s'haguessin notificat al sol·licitant, llevat que l'Ajuntament hagués intentat la notificació d'acord amb allò que preveu l'article 58.4 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, la llicència municipal d'obertura d'establiment sol·licitada s'entendrà atorgada per silenci administratiu positiu. El silenci positiu es limita a l'exercici de l'activitat i, en cap cas, tindrà efectes sobre la llicència urbanística.

5. La llicència o llicències sol·licitades s'hauran d'entendre desestimades per silenci administratiu negatiu quan l'atorgament de la llicència municipal ordinària d'obertura d'establiment comporti la transferència al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic o, quan la llicència urbanística sigui d'obres de nova planta i no s'hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable i el planejament.

### *Article 28. Contingut de la llicència*

1. Els documents en els que es formalitzin la llicència municipal d'obertura d'establiment i, si escau, la llicència d'obres, seran expedits pel Secretari General de l'Ajuntament. El contingut de la llicència d'obertura d'establiment haurà d'incloure les prescripcions tècniques incorporades a la resolució sobre l'atorgament d'aquesta llicència municipal, amb esment dels extrems següents:

a) Les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient amb el detall, quan escaigui, dels valors límits d'emissió.

- b) Les prescripcions necessàries relatives a la seguretat i a la protecció de la salut de les persones així com a la prevenció d'incendis.
- c) Les prescripcions necessàries per a la prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es puguin causar al veïnat, així com les mesures d'estalvi dels recursos naturals.
- d) Les mesures de gestió dels residus generats i, en particular, el sistema de recollida dels envasos industrials i comercials al que el titular de l'activitat s'hagi acollit.
- e) Les prescripcions necessàries per a la connexió de les instal·lacions a la xarxa de clavegueram.
- f) El sistema o sistemes de control a què se sotmet l'exercici de l'activitat per garantir l'adequació permanent o les determinacions legals i les fixades en la llicència.
- g) Les determinacions específiques establertes per la normativa sectorial reguladora de l'activitat concreta que es vulgui exercir.

#### *Article 29. Publicitat*

1. Les resolucions d'atorgament de les llicències s'han d'inserir en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en els mitjans telemàtics d'informació municipal, i s'han publicar a la Gasetta Municipal.
2. Un cop atorgada la llicència, el titular de l'activitat l'ha de tenir en un lloc adequat i visible situat dins del centre o establiment en el que s'exerceix i explota l'activitat autoritzada.

#### *Article 30. Autorització d'abocament*

L'atorgament de la llicència municipal d'obertura d'establiment resta condicionat, si s'escau, a l'obtenció de l'autorització d'abocament d'aigües residuals al clavegueram de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, o de l'Agència Catalana de l'Aigua si l'abocament és a la llera pública o al mar.

#### *Article 31. Control inicial i controls periòdics*

1. Les activitats sotmeses a llicència municipal d'obertura d'establiment han de ser objecte d'un control inicial durant el període de posada en marxa, i a controls periòdics cada deu anys realitzats d'acord amb allò que preveuen els articles 73 i 82 d'aquesta Ordenança.
2. Tanmateix, si l'activitat és objecte de modificacions que fan que revesteixi les característiques d'una activitat de les que es relacionen en els Annexos I o II d'aquesta Ordenança, l'activitat en qüestió es considerarà clandestina mentre no obtingui la corresponent llicència o autorització ambientals.

## *TÍTOL II*

### *La llicència i l'autorització ambientals*

## *CAPÍTOL I*

### *La llicència ambiental municipal*

#### *SECCIÓ 1ª. ÀMBIT D'APLICACIÓ, PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ*

##### *Article 32. Àmbit d'aplicació*

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats classificades que es relacionen als Annexes II.1 i II.2 d'aquesta Ordenança, tant el en seu primer establiment com en les posteriors modificacions substancials que s'hi pretenguin introduir.

##### *Article 33. Certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic*

1. L'obtenció de la certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic en vigor és un requisit previ a la sol·licitud de la llicència ambiental municipal.

2. Aquesta certificació s'ha de sol·licitar a l'Ajuntament amb la documentació següent:

- a) Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
- b) Avantprojecte tècnic, per triplicat, subscrit per tècnic competent visat pel corresponent col·legi professional, que inclourà memòria i plànols descriptius de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
- c) Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- d) Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals i, en particular, sobre les condicions d'accessibilitat exterior per als serveis d'emergències i sobre la existència de barreres arquitectòniques en els recorreguts d'accés a l'activitat, en el cas que el Codi d'Accessibilitat de Catalunya determini la seva eliminació. e) Estudi de mobilitat.
- f) Avaluació del risc associat al funcionament ordinari, així com del que podria derivar-se d'un succés accidental, com ara fuites, explosions, incendis o altres, amb expressió de l'àmbit territorial presumiblement afectat.
- g) Resguard acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés de la quota de la taxa per l'expedició del certificació que es sol·licita, d'acord amb l'Ordenança fiscal corresponent.

3. Les activitats compreses en els Annexos I i II que presentin riscos tecnològics de naturalesa química han d'aportar, a més, el corresponent estudi de seguretat, en el que caldrà incloure-hi l'anàlisi quantitatiu de riscos (ACR) i l'anàlisi de l'efecte dominó. En l'ACR s'han d'emprar, com a tècniques d'avaluació, guies o programes de càlcul de reconegut prestigi i, en particular,

- a) Guies de quantificació de riscos de la Direcció General de Protecció Civil del Ministeri de l'Interior.

b) CPR18E. Guidelines for quantitative risk assessment.

o bé les últimes tècniques de quantificació científicament reconegudes i d'aplicació i d'aplicació per al risc a considerar.

Els criteris de seguretat a complir seran:

a) Les zones d'intervenció i alerta que es determinen en l'ACR no han d'afectar en cap cas àrees de població permanent ni línies vitals de la ciutat.

b) El valor del risc individual en l'entorn no ha de superar el valor 10<sup>-6</sup> víctimes/any, o l'existència de risc greu per al medi ambient i els bens. Es considera en tots els casos no superar l'1% del risc de fons.

c) Per a les conseqüències de l'efecte dominó s'aplicaran els mateixos criteris del punt anterior.

d) L'índex de risc social haurà d'estar dins de la banda d'acceptabilitat establerta per la reglamentació d'aplicació.

#### *Article 34. Esmena de la sol·licitud de la certificació urbanística*

1. L'Ajuntament verificarà la documentació presentada per comprovar si s'ajusta als requisits previstos en l'article anterior. Cas de defecte de la petició, de manca de dades, de documentació necessària, o de comprovant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, en el seu cas, l'Administració municipal requerirà a l'interessat perquè en un termini no superior a deu dies, esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, circumstància que es reflectirà en la resolució expressa que es dicti. 2. El període de temps emprat per a completar o esmenar la documentació, no es computa als efectes de compliment del termini d'emissió del certificat.

#### *Article 35. Procediment, lliurament i contingut de la certificació*

1. En el procediment de la certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic s'emetrà un informe tècnic i un altre jurídic. A la vista d'aquest informes i de la proposta corresponent, l'òrgan municipal competent dictarà la resolució que pertorqui, de la qual en lliurarà certificació el Secretari General de l'Ajuntament, per ordre i amb el vist-i-plau de l'Alcalde, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud en el Registre General. Tot això sense perjudici del què disposa l'article anterior quant a l'esmena de la documentació que acompanya la sol·licitud de certificació.

2. La certificació ha de determinar la compatibilitat o no de l'activitat projectada amb la normativa i el planejament urbanístics en vigor, i s'hi han de fer constar els aspectes següents:

a) Respecte de la finca en què es projecta emplaçar l'activitat:

\* La classificació urbanística del sòl.

\* El planejament al qual està subjecta i el seu grau d'urbanització.

\* Els usos urbanístics admesos.

\* L'eventual afecció a béns o drets de titularitat municipal.

b) Respecte de l'activitat projectada:

\* Capacitat dels serveis públics municipals d'atendre els requeriments de l'activitat.

c) Condicions d'urbanització o d'altres que s'haurien d'imposar a la llicència urbanística, en el seu cas.

d) Mobilitat.

e) Condicions de seguretat específiques de les activitats compreses en els Annexos I i II que presentin riscos tecnològics de naturalesa química han d'aportar.

3. Si l'activitat projectada no resulta compatible per ubicar-se, total o parcialment, en sòl afectat pel planejament, la declaració de no compatibilitat indicarà si, malgrat això, es pot sol·licitar la llicència ambiental, sempre que es compleixin les condicions que, en cada cas, estableixi la legislació urbanística per a les llicències de caràcter provisional amb clàusula de precari i que es formalitzi la renúncia a la indemnització que pogués correspondre en cas d'expropiació o d'execució del planejament.

4. En el cas que no s'expedeixi la certificació dins el termini establert, el procediment de la llicència ambiental municipal es pot iniciar acompanyant a la sol·licitud corresponent còpia de la sol·licitud de la certificació i de la documentació ajuntada en la qual hi figuri la data de presentació al Registre General.

5. La certificació de compatibilitat urbanística no té caràcter vinculant per a l'Ajuntament, això sense perjudici de la responsabilitat que l'interessat pugui exigir a l'Administració municipal pels danys i perjudicis que se li puguin causar com a conseqüència de la denegació de la llicència urbanística.

### ***Article 36. Sol·licitud de la llicència ambiental municipal***

La sol·licitud de llicència ambiental municipal ha d'anar acompanyada de tres exemplars de la documentació següent:

a) Projecte tècnic redactat per tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional, que ha de contenir la informació detallada en els articles 37 a 42 d'aquesta Ordenança.

b) La documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis, d'acord en el seu cas amb allò que preveu l'article 43 d'aquesta Ordenança, i en els aspectes de protecció de la salut pública.

- c) Documentació exigida pel Reglament Metropolità d'Abocaments d'Aigües Residuals per l'autorització de l'abocament d'aquestes aigües residuals al clavegueram municipal o a la xarxa metropolitana de sanejament; o bé, si l'abocament és directa a la llera pública o al mar, la documentació exigida per l'Agència Catalana de l'Aigua per atorgar l'autorització corresponent; en aquest mateix supòsit d'abocament directa, però quan l'activitat estigui inclosa a l'Annex II.2 del Decret 136/1999, s'acompanyarà document acreditatiu de la sol·licitud de l'autorització corresponent adreçada a l'esmentada Agència Catalana de l'Aigua.
- d) Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, lliurat per l'Ajuntament d'acord amb allò que preveu l'article 35 d'aquesta Ordenança.
- e) Estudi geològic que mostri la caracterització de l'estat inicial del terreny i les mesures d'adequació, en el seu cas, a aplicar per a la implantació de l'activitat. L'estudi haurà de contenir les determinacions previstes a l'article 44 d'aquesta Ordenança. No cal la presentació d'aquest estudi quan les dades es continguin en el projecte tècnic que acompanya a la sol·licitud o bé es tracti de la primera ocupació del sòl en un polígon industrial que compti amb una avaluació geològica suficient.
- f) Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l'activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada. Aquest document ha de consignar les dades que conté l'article 45 d'aquesta Ordenança.
- g) Estudi d'impacte ambiental, preceptiu en el cas que, d'acord amb l'ordenament d'aplicació, l'activitat estigui sotmesa al procediment d'avaluació i de declaració de l'impacte ambiental.
- h) Opcionalment, declaració de les dades contingudes en el projecte tècnic i la resta de documentació complementària que s'acompanya a la sol·licitud de llicència que, a criteri de qui ho sol·licita, gaudeixin de confidencialitat. En la declaració s'ha d'expressar la norma, amb rang de Llei, que empara la confidencialitat de les dades.
- i) Qüestionari d'activitat complimentat pel tècnic redactor del projecte, en el model oficial aprovat i subministrat per l'Ajuntament, amb un breu resum del contingut del projecte que resulti entenedor per a qualsevol persona sense coneixements tècnics.
- j) Document acreditatiu de la forma de recollida i gestió dels residus i, en particular de la fracció orgànica i dels envasos i residus d'envasos industrials i comercials; o bé acreditació d'haver sol·licitat a l'Ajuntament que es faci càrrec d'aquells residus susceptibles de ser gestionats pel servei municipal de recollida, d'acord amb allò que estableixin al respecte l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà i l'Ordenança de la taxa, preu públic o tarifa corresponent.

- k) Qualsevol altra documentació que exigeixi la legislació vigent.
- l) Resguard acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés de la taxa per la tramitació de l'expedient, d'acord amb allò que disposi la corresponent Ordenança Fiscal.

2. En el cas que l'activitat que es pretén exercir estigui inclosa en l'Annex III.6 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, cal afegir a la documentació indicada en el paràgraf anterior l'estudi d'impacte acústic regulat a l'article 62 de la referida Ordenança municipal.

#### **Article 37. Projecte tècnic**

1. El projecte tècnic que ha d'acompanyar la sol·licitud de llicència ambiental municipal ha d'anar signat per un tècnica competent, ha de estar visat pel col·legi professional corresponent, i ha de contenir informació detallada sobre tots i cadascun dels aspectes que en funció de la tipologia d'activitat els pertorqui i que es fixen en els articles següents d'aquesta Ordenança.

2. El projecte tècnic i la documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis i de protecció de la salut pública s'han de presentar amb el format i suport informàtic que fixi el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb la participació dels altres òrgans de l'Administració que intervenen en el procediment d'avaluació i resolució.

#### **Article 38. Dades generals del projecte**

Tots els projectes han de contenir informació suficient sobre els aspectes següents:

1. Dades de l'empresa: NIF, nom fiscal i, anagrama, si és el cas, adreça completa i representant legal.

2. Dades de la instal·lació o establiment:

a) Nom, adreça completa i CCAE.

b) Informació gràfica que comprèn:

\* Plànol de l'emplaçament del centre o establiment expressat en coordenades UTM i, delimitació de l'espai que ocupen les instal·lacions sobre cartografia 1:5000 amb quadrícula UTM incorporada. En el mateix plànol, s'han de graficar les infraestructures i els equipaments existents en el polígon o zona on s'emplaça l'activitat i que tinguin incidència sobre la seva avaluació ambiental.

\* Plànol a escala 1:1000 que expressi la situació relativa als edificis o les activitats confrontants.

\* Plànol detallat de les instal·lacions, planta i secció, a escala adequada, normalment entre 1:100 i 1:200.

c) Classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació, segons el planejament urbanístic vigent.

d) En cas que la instal·lació o establiment es projecti sobre edificació existent, el seu detall en plànol a escala adequada, normalment entre 1:50 i 1:100.

e) Característiques del sòl i del subsòl que ocupen les instal·lacions.

f) Justificació del compliment de la normativa vigent sobre protecció del medi ambient, salubritat, prevenció d'incendis, establiments de pública concurrència, supressió de barreres arquitectòniques, així com de la resta normativa general i sectorial reguladora de l'activitat concreta que es pretengui instal·lar o modificar.

g) Relació d'instal·lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial amb indicació de la reglamentació aplicable a cada instal·lació.

h) Justificació del compliment de les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball, contingudes en els Annexes I i IV del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, o norma que el substitueixi.

i) La documentació o especificacions tècniques requerides per la normativa general i sectorial reguladora de l'activitat concreta que es vulgui implantar.

### 3. Dades de l'activitat:

a) Classificació de l'activitat o activitats que es projecten d'exercir en el centre o establiment, segons els Annexos del Decret 136/1999.

b) Descripció de l'activitat o activitats projectades amb indicació de les fonts de les emissions, el tipus i la magnitud d'aquestes i, les mesures adoptades per prevenir la transferència de contaminació d'un medi a un altre.

c) Descripció de la maquinària, equips tècnics, instal·lacions, productes o components a utilitzar, emmagatzemar i produir, inclosos els productes intermedis, amb expressió de les quantitats produïdes i emmagatzemades i de la forma d'emmagatzematge i, descripció del procés de producció.

d) Calendari previst d'execució del projecte i de la data d'inici de l'activitat.

### 4. Dades d'energia:

a) Tipus d'energia i procedència, potència nominal i consum anual.

- b) Instal·lacions i, si s'escau, tipus i capacitat d'emmagatzematge.
- c) Mesures d'estalvi d'energia adoptades, així com la indicació del cabdal de subministrament d'aigua necessari per al funcionament de l'activitat i la font de proveïment d'aquest darrer.

5. Medi potencialment afectat:

- a) Delimitació de l'espai físic (àmbit territorial) afectable per a tots i cadascun dels focus emissors de contaminació i la qualificació urbanística d'aquests espais, tant en el supòsit de funcionament ordinari de l'activitat com en el cas d'eventuals esdeveniments de caràcter excepcional, derivats del mal funcionament o d'accidents.
- b) Qualitat de l'aire i capacitat i vulnerabilitat del territori dins de l'espai físic afectable, referit a les matèries o substàncies que siguin objecte d'emissió.
- c) Qualitat de les aigües afectades per l'abocament d'aigües residuals.

La informació establerta als paràgrafs b) i c) anteriors ha de ser la proporcionada per l'Administració competent.

#### ***Article 39. Altres dades del projecte***

Atenent a les característiques de l'activitat pel que fa a les seves emissions, generació de residus, energia, matèries i substàncies utilitzades o produïdes i, altres aspectes que són objecte d'avaluació als efectes d'aquesta Ordenança, el projecte que ha d'acompanyar la sol·licitud de llicència ambiental municipal ha de preveure les dades generals i específiques del projecte amb les dades que, segons escaigui, s'estableixen a continuació: A) Emissions a l'atmosfera:

I. Dades sobre emissions de fums i gasos en xemeneies:

a) Detall de cada focus emissor on s'especifiqui:

\* Ubicació.

\* Procés associat al focus emissor i les matèries primeres i, si s'escau, combustible utilitzat i consum.

\* Característiques físiques del focus emissor i, específicament, si escau: I. Forma, alçada i diàmetre de la xemeneia.

II. Punts de presa de mostres amb descripció gràfica de les boques de mostreig.

III. Equipament de la plataforma de treball.

b) Sistemes de tractament dels fums i gasos originats amb especificació de:

- \* Tipus de mesures, equips i les seves característiques.

- \* Eficàcia de cada mesura.

- \* Sistema de manteniment i de control dels equips.

c) Característiques de les emissions:

- \* Relació de contaminants emesos, amb indicació de la concentració i emissió màssica.

- \* Cabal o velocitat i temperatura dels gasos de sortida.

- \* Hores emissió/dia.

- \* Dies emissió/any.

d) Autocontrol de les emissions. Sistemes d'autocontrol, especificant:

- \* Procediment de calibratge i freqüència.

- \* Sistema de manteniment dels equips.

- \* Registre i comunicació de les dades.

- \* Equips, amb les característiques dels analitzadors.

- \* Mètodes de mesura, escala i precisió.

2. Dades sobre les emissions de fums i gasos en torxes de seguretat:

- \* Descripció de les situacions que en provoquen el funcionament i previsió del temps de funcionament en h/dia i d/any.

- \* Origen, caracterització i cabals màssics de les substàncies canalitzades.

3. Dades sobre les emissions difuses:

- \* Descripció i ubicació dels focus i del procés que les genera.

- \* Caracterització de les emissions i estimació de la seva magnitud en t/any.

- \* Mesures de minimització i confinament.

4. Dades sobre emissions de sorolls i vibracions:

- \* Ubicació dels focus i breu descripció del procés que les genera.

- \* Nivells d'emissió en origen de cada focus.

- \* Projecte d'aïllament amb detall de la seva instal·lació i càlcul de rendiment.
  - \* Nivells estimats d'immissió a l'exterior o, en el seu cas, als locals confrontants i, relació amb els valors guia fixats per la normativa d'aplicació.
- B) Emissions d'aigües residuals. Pel que fa a aquestes emissions les dades i la documentació a aportar són les que exigeix el Reglament Metropolità d'Abocaments d'Aigües Residuals per a l'atorgament de l'autorització corresponent.

c) Generació de residus:

1. Detall de cada focus de generació de residus i breu descripció del procés que els origina on s'especifiqui:

- \* Caracterització, tipologia segons el CRC i producció en Kg/dia i Tm/any per a cada tipologia.

- \* Tècniques emprades per a la seva reducció en origen.

2. Detall de les instal·lacions de gestió interna dels residus i especificació sobre:

- \* Sistema de recollida.
- \* Sistema d'emmagatzematge.
- \* Sistema de lliurament per a la seva gestió externa.
- \* Destinació final prevista per a cada tipologia de residus.

D) Anàlisi dels riscos inherents al funcionament ordinari de l'activitat, així com dels de caràcter excepcional, derivats d'un mal funcionament o d'accidents.

**Article 40. Dades específiques del projecte per a activitats industrials**

Les activitats industrials sotmeses al règim de llicència ambiental municipal han de completar les dades generals del projecte amb les específiques que s'estableixen a continuació:

1. Matèries primeres i auxiliars:

- \* Tipus i estat (sòlid, líquid, gasós).

- \* Consum anual.

- \* Sistema de subministrament i emmagatzematge i característiques les instal·lacions d'emmagatzematge.

2. Processos. Per a cadascun d'ells:

- \* Descripció suficient amb el corresponent diagrama, si escau, dels processos de producció i identificació dels equips o instal·lacions que generen emissions.

- \* Diagrama de blocs.
  - \* Balanç de matèria i d'energia.
  - \* Temps de funcionament (d/any i h/dia).
3. Productes intermedis i finals:
- \* Tipus i estat (sòlid, líquid, gasós).
  - \* Producció anual (unitats o pes).
  - \* Sistema d'emmagatzematge i d'expedició i característiques principals de les seves instal·lacions.
  - \* Tipologia dels envasos.
  - \* Composició analítica, quan no es tracti de productes químics purs.
4. Nombre de treballadors:
- \* Nombre total de treballadors.
  - \* Torns que es realitzen.
  - \* Nombre de treballadors que realitzen un mateix torn.

*Article 41. Dades específiques del projecte per a activitats de gestió de residus*

1. Les activitats de gestió de residus sotmeses al règim d'autorització o de llicència ambientals han de completar les dades generals del projecte amb les específiques que s'estableixen a continuació:

a) Residus a gestionar i matèries primeres:

- \* Característiques dels residus i de les matèries primeres.
  - \* Capacitat de tractament.
  - \* Sistema de recepció, de subministrament, i d'emmagatzematge, i característiques principals de les seves instal·lacions.
  - \* Tipus d'anàlisi a la recepció dels residus i llista d'equips amb els quals es realitza.
- b) Processos. Per a cadascun d'ells:
- \* Descripció suficient amb el corresponent diagrama, incloent el de blocs i de fluxos, si escau, identificació dels equips i les instal·lacions que generen emissions.

- \* Balanç de matèria.
- \* Temps de funcionament (d/any i h/dia).

c) Productes obtinguts:

- \* Característiques.
- \* Producció anual.
- \* Sistema d'emmagatzematge i d'expedició i, característiques de les seves instal·lacions.

2. En el cas d'instal·lacions de gestió de residus mitjançant dipòsit controlat, el projecte haurà de contenir la documentació i les dades que s'especifiquen en el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

**Article 42. Dades específiques del projecte per a activitats energètiques**

Les activitats energètiques sotmeses al règim d'autorització o de llicència ambientals han de completar les dades generals del projecte amb les específiques següents:

a) Dades del combustible utilitzat:

- \* Tipus i composició.
- \* Potència calorífica inferior i superior.
- \* Consum (horari i anual).
- \* Sistema de subministrament i emmagatzematge i característiques principals de les seves instal·lacions (tipus, capacitat).

b) Dades de la instal·lació:

- \* Descripció de l'activitat.
- \* Processos principal i associats, i breu descripció i identificació dels equips i instal·lacions que generen emissions.
- \* Temps de funcionament (d/any i h/dia).
- \* Capacitat de la instal·lació expressada en potència tèrmica (MWT) i elèctrica (Mwe) i, en el seu cas, tones vapor/h i calor produït (tèrmies/h).

**Article 43. Prevenció d'incendis**

Els projectes de les activitats de risc d'incendi relacionades a l'Annex IV.A del Decret 136/1999, han acompanyar la documentació següent:

1. Memòria, que incorpori la descripció i justificació dels següents apartats:

1.1. Informació general:

- \* Identificació de l'activitat.
- \* Ús o usos.
- \* Superfície de l'edifici o local.
- \* Normativa de prevenció d'incendis que li és d'aplicació.

#### 1.2. Condicions d'accessibilitat:

- \* Amplada del carrers.
- \* Número de façanes accessibles.
- \* Hidrants.

#### 1.3. Compartimentació:

- \* Criteris de compartimentació.
- \* Paràmetres RF dels sectors d'incendi.
- \* Superfícies dels sectors.
- \* Identificació dels locals de risc.

#### 1.4. Evacuació.

Descripció de tots els paràmetres que incideixen en l'evacuació de les persones i accessibilitat als bombers.

- \* Ocupació.
- \* Número de sortides, tipologia i el seu dimensionat.
- \* Hipòtesi de bloqueig.
- \* Longituds i alçades d'evacuació.
- \* Característiques de ventilació, il·luminació, etcétera.

#### 1.5. Comportament al foc dels elements constructius i materials.

##### 1.5.1. Estabilitat al foc de l'estructura (EF).

- \* Descripció de l'estructura.
- \* Indicació dels EF normatius.
- \* Justificació dels paràmetres d'estabilitat al foc.

### 1.5.2. Reacció al foc dels materials de recobriment.

\* Descripció dels materials de recobriment (terres, parets, sostres).

\* Indicar RF normatius.

### 1.6. Instal·lacions generals.

\* Serveis generals. Conduccions.

\* Instal·lacions centralitzades de climatització o ventilació. Descripcions.

\* Instal·lacions centralitzades d'extracció de fums. Descripcions.

\* Criteris de sectorització.

### 1.7. Instal·lacions de protecció contra incendis.

\* Exigències normatives lligades atenent a l'activitat.

\* Descripció de les instal·lacions.

\* Quantificació.

\* Ubicació.

### 1.8. Pla d'emergència.

#### 2. Plànols.

##### 2.1. Consideracions generals.

\* Preferentment d'una mida no superior a DIN A2.

\* Sintètics amb totes les variables de prevenció: Compartimentació, evacuació, instal·lacions, etcétera.

\* Identificar les parts d'obra nova, reformades o ampliades.

\* Grafisme adequat, recollint els paràmetres de compartimentació, evacuació, instal·lacions generals i protecció contra incendis.

##### 2.2. Tipus de plànols.

\* Plànol de situació i emplaçament que incorpori la informació dels paràmetres d'accessibilitat.

\* Plànols de planta de tots els nivells projectats amb la informació sobre compartimentació, evacuació, estructura i instal·lacions.

- \* Plànols de secció amb la mateixa informació.
- \* Plànols de façana on es justifiquin els paràmetres d'accessibilitat, compartimentació i reacció al foc dels materials si s'escau.

#### ***Article 44. Estudi geològic sobre la qualitat del sòl***

1. El sòl a ocupar per les instal·lacions ha de ser compatible amb l'exercici de l'activitat. Aquesta compatibilitat s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un estudi geològic que mostri la caracterització de l'estat inicial del terreny i les mesures d'adequació, en el seu cas, a aplicar per a la implantació de l'activitat.
2. L'estudi geològic ha de contenir:
  - a) Una descripció de la metodologia emprada per al reconeixement del terreny.
  - b) La caracterització litològica i estructural dels materials.
  - c) La identificació dels nivells d'aigua.

3. La presentació de l'estudi geològic no serà necessària quan les dades referenciades en el punt anterior es continguin en el projecte tècnic que acompanya la sol·licitud o bé es tracti de la primera ocupació del sòl en un polígon industrial que compti amb una avaluació geològica suficient.

#### ***Article 45. Responsable tècnic***

1. A la sol·licitud de llicència ambiental municipal s'hi ha d'acompanyar el document acreditatiu de la designació, per part del titular de l'activitat, del tècnic que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada, amb el visat del col·legi professional corresponent.
2. El document acreditatiu de la designació ha de consignar: el nom de la persona designada, la seva titulació i col·legiació, i a seva adreça professional.

#### ***Article 46. Declaració de dades confidencials***

El titular de l'activitat, mitjançant declaració, pot expressar aquelles dades contingudes en el projecte tècnic i de la resta de documentació complementària que s'acompanya a la sol·licitud d'autorització o de llicència ambiental que, segons el seu criteri, gaudeixen de confidencialitat. En la declaració, ha d'expressar la norma, amb rang de Llei, que empara la confidencialitat de les dades.

#### ***Article 47. Comunicació de la recepció***

1. Dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, es comunicarà a l'interessat la recepció de la seva sol·licitud de llicència ambiental. La data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l'òrgan competent; el

termini màxim per resoldre i notificar l'atorgament o la denegació de la llicència i, els efectes que produeix el silenci administratiu i també, si és el cas, la manca de documentació.

2. Complimentat el tràmit anterior, el responsable de l'expedient trametrà còpia de la sol·licitud i de la documentació que l'acompanya a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, OGAU, en el cas d'activitats incloses en l'Annex II.1 d'aquesta Ordenança, i a la Ponència Ambiental Municipal en el cas d'activitats incloses a l'Annex II.2 d'aquesta mateixa Ordenança.

#### ***Article 48. Esmena de la sol·licitud***

Si l'Administració municipal comprova la manca de documentació o insuficiències en els documents presentats, ha de comunicar al sol·licitant les mancances observades per tal que les complementi o esmeni dins d'un termini que no podrà ser inferior a deu dies ni superior a tres mesos, amb l'avertiment que, si així no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud o per caducat el procediment, segons el cas.

#### ***Article 49. Suficiència del projecte***

1. L'òrgan competent de l'Ajuntament, o la Ponència Ambiental de la Generalitat en el cas d'activitats incloses en l'Annex II.1 d'aquesta Ordenança, ha de pronunciar-se, en l'àmbit de les respectives competències, sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i de l'altra documentació presentada, en el termini màxim de quinze dies.

2. En el cas que s'observin mancances en el projecte o en la documentació presentada no detectades en el tràmit regulat a l'article anterior, l'Ajuntament d'ofici o a instància de la Ponència Ambiental de la Generalitat, segons el cas, n'ha de donar trasllat al sol·licitant per a què els complementi o esmeni, amb les mateixes condicions que estableix l'article anterior.

3. El període de temps emprat per complementar o esmenar el projecte o la documentació, no es computa als efectes de compliment del termini de resolució, ni per a l'emissió de l'informe de la Ponència Ambiental de la Generalitat.

4. El resultat del tràmit de complement i esmena del projecte i documentació presentada es comunica als òrgans de les altres administracions públiques que hagin d'intervenir en el procés d'avaluació ambiental.

5. Transcorregut el termini atorgat al peticionari de la llicència, sense que s'hagin complementat o esmenat les insuficiències, es declararà i notificarà al peticionari el desestiment de la seva sol·licitud o la caducitat del procediment segons el cas, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

#### ***Article 50. Informació pública i informació veïnal***

1. Transcorregut el termini de quinze dies esmentat en l'article anterior o, en el seu cas, un cop esmenades les mancances observades, l'Ajuntament ha de sotmetre la sol·licitud i documentació que l'acompanya, a informació pública, durant el termini de vint dies, i a

informació veïnal durant el termini de deu dies, perquè les persones que es considerin afectades per l'activitat que es pretengui implantar o modificar substancialment, puguin formular les al·legacions o suggeriments pertinents.

2. La informació pública es formalitzarà per mitjà de la publicació del corresponent anunci a la Gasetta Municipal, al tauler d'anuncis del Consell de Districte corresponent i als mitjans telemàtics d'informació municipal.
3. La informació veïnal es farà efectiva seguint el procediment regulat a l'article 23 d'aquesta Ordenança.

#### *Article 51. Trameses als òrgans ambientals*

1. Transcorreguts els termini d'informació pública i veïnal, el responsable de l'expedient trametrà còpia de les al·legacions formulades, en tot cas, a la Ponència Ambiental Municipal, i a l'OGAU si es tracta d'una activitat inclosa a l'Annex II.1 d'aquesta Ordenança.
2. Abans de l'inici de la informació pública i veïnal, cal trametre la documentació relativa a l'abocament d'aigües residuals al clavegueram municipal o a la xarxa metropolitana de sanejament a l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus.

#### *Article 52. Informes municipals per a les activitats de l'Annex II.2*

1. Simultàniament a l'obertura del tràmit d'informació pública i veïnal la Ponència Ambiental Municipal iniciarà els treballs d'estudi i informe de les sol·licituds i la documentació de les activitats relacionades a l'Annex II.2 d'aquesta Ordenança i, després, de les al·legacions que s'hagin pogut formular durant el període d'informació pública i veïnal.
2. L'informe de la Ponència Ambiental Municipal s'ha de pronunciar, d'acord amb la legislació i les ordenances municipals en vigor, sobre tots els aspectes que han de figurar en la resolució i ha d'incorporar els informes emesos pels serveis municipals d'urbanisme, els de medi ambient i els de prevenció d'incendis. La Ponència Ambiental Municipal vetllarà, en particular, pel compliment de les prescripcions de l'article 162.1 de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, en ordre a què les activitats que així ho requereixen disposin del corresponent espai per a l'emmagatzematge de residus.
3. Si hi ha abocaments directes a la llera pública o al mar, simultàniament a l'obertura del tràmit d'informació pública, s'ha de trametre la corresponent sol·licitud i la documentació complementària a l'Agència Catalana de l'Aigua.

#### *Article 53. Informes de la Generalitat per a les activitats de l'Annex II.1*

1. L'OGAU, un cop rebuda la còpia de la sol·licitud i de la documentació que l'acompanya, tramitarà l'expedient en la forma prevista a l'article 29.1 de la Llei 3/1998 i els articles 42, 44 i 45 del Decret 136/1999, per tal que la Ponència Ambiental de la Generalitat emeti de forma integrada el seu informe preceptiu respecte a les emissions contaminants, formuli,

si escau, la declaració d'impacte ambiental i incorpori els informes relatius a la protecció de la salut pública i a l'abocament directa d'aigües residuals a la llera pública o al mar.

2. Sens perjudici de l'informe preceptiu de la Ponència Ambiental de la Generalitat, les activitats de l'Annex II.1

també estan sotmeses a informe de la Ponència Ambiental Municipal en els mateixos termes que es preveu per a les activitats de l'Annex II.2. L'informe sobre prevenció d'incendis correspon emetre'l, en tot cas, als serveis municipals competents.

3. Els informes de la Ponència Ambiental de la Generalitat són vinculants si són desfavorables o imposen mesures preventives, de control o de garantia i, han d'ésser emesos en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de rebuda de la documentació a què fa referència l'article 47.2 d'aquesta Ordenança. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin rebut per l'Ajuntament, els esmentats informes s'entenen favorables al projecte.

#### *Article 54. Proposta de resolució*

1. Emès l'informe de la Ponència Ambiental Municipal i rebut, en el seu cas, per l'Ajuntament l'informe preceptiu de la Ponència Ambiental de la Generalitat, el responsable de l'expedient els ha de contrastar amb les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública i veïnal, i ha de formular la corresponent proposta de resolució.

2. Si hi haguessin contradiccions entre els diversos informes emesos o amb les al·legacions presentades, el responsable sotmetrà novament l'expedient a informe de la Ponència Ambiental Municipal i, en el seu cas, de la Ponència Ambiental de la Generalitat, a fi que dictaminin sobre les discrepàncies en el termini màxim de deu dies. A la vista dels nous informes o transcorregut el termini sense que s'hagin rebut, el responsable de l'expedient formularà la corresponent proposta de resolució.

3. La proposta de resolució ha d'ésser notificada als interessats, i a l'OGAU en el cas d'activitats de l'Annex II.1 d'aquesta Ordenança, atorgant els hi un termini de deu dies per fer les al·legacions que considerin oportunes. Es pot prescindir d'aquest tràmit d'audiència quan no s'hagin presentat al·legacions desfavorables a la instal·lació de l'activitat durant el tràmit d'informació pública i veïnal, sempre i quan no figurin en el procediment ni siguin tingudes en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat i, la proposta de resolució sigui favorable a l'atorgament de la llicència municipal.

4. Als efectes del tràmit d'audiència que es contempla en el paràgraf anterior, tenen la consideració d'interessats els veïns que hagin formulat al·legacions en el tràmit d'informació veïnal.

#### *Article 55. Resolució*

1. L'Alcalde o l'òrgan en el que hagi delegat o desconcentrat aquesta competència, a la vista de la proposta de resolució i valorades les actuacions practicades a l'expedient, resoldrà sobre l'atorgament o denegació de la llicència.

2. La resolució administrativa que atorgui o denegui la llicència es notificarà als interessats i al als òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan hagin intervingut en el procediment. En la notificació que es practiqui a sol·licitant se l'indicarà que pot passar a recollir a les oficines municipals, en horari d'oficina, la llicència atorgada, així com una còpia segellada del projecte tècnic i se l'advertirà que en cap cas podrà començar a exercir l'activitat abans que s'hagin dut a terme l'actuació de control inicial de l'activitat regulada en aquesta Ordenança.

### *Article 56. Autorització d'abocament*

1. La llicència municipal ambiental de les activitats de l'Annex II.1 d'aquesta Ordenança que comprenen abocaments directes d'aigües residuals a la llera públic o al mar incorpora les determinacions fixades en l'informe de la Ponència Ambiental de la Generalitat sobre aquests abocaments, els quals queden autoritzats amb l'atorgament de la llicència municipal.

2. En el cas de les activitats de l'Annex II.2 d'aquesta Ordenança en què hi hagi abocaments directes a la llera pública o al mar, simultàniament a la tramitació de la llicència ambiental municipal, s'ha de tramitar l'autorització d'abocament corresponent o la petició d'informe, en el seu cas.

3. Pel que fa als abocaments al clavegueram municipal o a la xarxa metropolitana de sanejament i tal i com es preveu a l'article 51.2 d'aquesta Ordenança, l'Ajuntament ha de trametre a l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus la documentació relativa aquests abocaments a fi que per aquesta Entitat es resolgui sobre la corresponent autorització.

### *Article 57. Termini*

1. La resolució sobre l'atorgament o la denegació de la llicència municipal ambiental es dictarà i notificarà al sol·licitant en el termini de quatre mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament.

2. Excepcionalment, atenent la complexitat de l'expedient, el nombre de sol·licituds o de persones afectades, l'Ajuntament podrà prorrogar aquest termini per un període que no pot ser superior a quatre mesos més, mitjançant resolució motivada que haurà de notificar-se als interessats.

3. El termini restarà interromput en els supòsits previstos als articles 47 i 48.3, en el cas que es demani esmena de la sol·licitud o millora de la documentació i en la resta de supòsits que preveu l'article 42.5 de la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

4. Passat el termini de quatre mesos, si no s'hagués notificat al peticionari la resolució sobre l'atorgament o denegació de la llicència ambiental municipal, llevat que l'Ajuntament hagués intentat la notificació, la llicència s'entendrà atorgada per silenci administratiu positiu. No obstant això, si l'atorgament de la llicència ambiental municipal comportés la transferència al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, la llicència ambiental s'haurà d'entendre desestimada per silenci administratiu negatiu.

5. La llicència municipal ambiental atorgada per silenci administratiu en cap cas no generarà facultats ni drets contraris a l'ordenament jurídic i, particularment, sobre el domini o els serveis públics.

### *Article 58. Contingut de la llicència*

1. El document en què es formalitzi la llicència, que serà lliurat pel Secretari General de l'Ajuntament, haurà d'incloure les prescripcions tècniques incorporades a la resolució sobre l'atorgament de la llicència, que com a mínim contindrà:

- a) Les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient, tot detallant, quan s'escaigui, els valors límits d'emissió i les mesures preventives de control o de garantia que siguin procedents.
- b) Les prescripcions necessàries relatives a la seguretat i a la protecció de la salut pública així com a la prevenció d'incendis.
- c) Les prescripcions necessàries per a la prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es puguin causar al veïnat així com les mesures d'estalvi dels recursos naturals.
- d) Les mesures de gestió dels residus generats.
- e) Les prescripcions necessàries per a la connexió de les instal·lacions a la xarxa municipal d'aigua potable i clavegueram.
- f) El sistema o sistemes de control a què se sotmet l'exercici de l'activitat per garantir l'adequació permanent a les determinacions legals i les fixades en la llicència.
- g) Les determinacions específiques establertes per la normativa sectorial reguladora de l'activitat concreta que es vulgui exercir.

2. Quan s'efectuïn abocaments directes d'aigües residuals a la llera pública o al mar, la llicència ambiental municipal incorporarà, a més, les determinacions fixades en l'informe de la Ponència Ambiental de la Generalitat de Catalunya sobre aquests abocaments els quals queden autoritzats amb l'atorgament de la llicència ambiental municipal en el cas de les activitats incloses en l'Annex II.1 d'aquesta Ordenança.

3. En el cas d'activitats de l'Annex II.2 d'aquesta Ordenança en què hagi abocaments a la llera pública o al mar, la llicència s'atorgarà condicionada a l'obtenció de la corresponent autorització d'abocament atorgada per l'Agència Catalana de l'Aigua.

4. Si els abocaments són al clavegueram municipal o a la xarxa metropolitana de sanejament, la llicència ambiental municipal resta condicionada a l'atorgament de l'autorització d'aquests abocaments per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus.

5. Quan es tracti d'activitats de l'Annex II.1 d'aquesta Ordenança, la llicència ambiental municipal ha de fixar l'import mínim de cobertura de la pòlissa d'assegurances per responsabilitat civil per danys ocasionats per l'activitat autoritzada.

### *Article 59. Publicitat*

1. Les resolucions d'atorgament de les llicències ambientals municipals s'han d'inserir en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la Gasetta Municipal i en els mitjans informàtics i telemàtics d'informació municipal.

2. Atorgada la llicència, el seu titular l'haurà de tenir sempre col·locada en un lloc adequat i visible situat dins del centre o establiment en el que s'exerceixi o exploti l'activitat autoritzada.

3. Les resolucions d'atorgament de les llicències ambientals municipals són d'accés públic, de conformitat amb allò que, en particular, estableix al respecte l'ordenament sobre el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient i, amb caràcter general, l'ordenament sobre l'accés al registres i arxius públics.

### *Article 60. Transmissió de les llicències ambientals*

1. La llicència ambientals és transferible, amb la comunicació prèvia dirigida a l'òrgan ambiental competent en què s'acrediti la subrogació del nou titular en els drets i en els deures derivats de l'autorització.

2. Transcorregut el termini d'un mes a comptar de la data de comunicació sense que l'Administració hagi notificat la no procedència de la transmissió, és considerarà aquesta plenament eficaç, sempre que el nou titular hagi acreditat el compliment de les mesures de garantia a què fa esment l'article següent.

3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular són assumides pel nou titular.

4. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent o sense que s'hagi donat compliment a les mesures de garantia legalment establertes, l'antic i el nou titular

queden subjectes de forma solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de la llicència ambiental.

## **SECCIÓ 2<sup>a</sup>. LLICÈNCIA AMBIENTAL I LLICÈNCIA D'OBRES**

### **Article 61. Preeminència de la llicència ambiental**

1. L'Ajuntament no pot atorgar la llicència d'obres sense l'atorgament previ o simultani de la llicència ambiental municipal.

2. Quan en el centre o establiment on es pretén realitzar l'activitat projectada sigui necessari efectuar obres d'edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació per dur a terme dita activitat, el sol·licitant de la llicència ambiental municipal pot demanar de forma simultània la preceptiva llicència d'obres, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental.

3. L'eventual obtenció de la llicència ambiental per silenci positiu no tindrà cap mena d'efecte sobre la llicència d'obres.

### **Article 62. Sol·licitud simultània de llicències**

1. Si la sol·licitud de llicència d'obres es realitza de forma simultània a la de la llicència ambiental, cal d'acompanyar la documentació tècnica que correspongui a cadascuna de les llicències demanades.

2. Les sol·licituds simultànies de llicència ambiental i llicència d'obres es tramiten, si escau, en un sol expedient i, sempre que sigui possible, els diferents tràmits es practiquen de forma simultània. En aquest supòsit, el termini per a l'atorgament de la llicència d'obres s'inicia un cop ha estat atorgada la llicència ambiental, però el termini per dictar i notificar la llicència d'obres quedarà reduït a un mes pel que fa a les llicències d'obres majors, i quinze dies pel que fa a les llicències d'obres menors.

### **Article 63. Projecte tècnic únic**

Si s'opta per la sol·licitud simultània de la llicència ambiental i de la llicència d'obres, i el tècnic autor del projecte de la instal·lació o activitat és, alhora, competent per redactar el projecte d'obres, la sol·licitud d'ambdues llicències podrà venir acompanyada d'un únic projecte tècnic, el qual haurà de contenir, a més de les determinacions previstes als articles 37 i següents d'aquesta Ordenança, les determinacions requerides per les ordenances municipals i la normativa general i sectorial per als projectes d'obres i, justificar el compliment de la normativa sobre supressió de barreres arquitectòniques, prevenció d'incendis i prevenció de riscos laborals en obres de construcció. En aquest supòsit, el sol·licitant ha d'acompanyar dos exemplars més del projecte tècnic.

(...)

